



Asamblea General

Distr. general
20 de julio de 2017
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

36º período de sesiones

11 a 29 de septiembre de 2017

Tema 3 de la agenda

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo*

Nota de la Secretaría

La Secretaría tiene el honor de transmitir al Consejo de Derechos Humanos el informe temático del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, elaborado en cumplimiento de la resolución 33/3 del Consejo.

* Los anexos y la bibliografía se reproducen como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.

GE.17-12317 (S) 150817 170817



* 1 7 1 2 3 1 7 *

Se ruega reciclar



Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo

Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
II. Aspectos positivos.....	5
III. Desafíos.....	6
A. Degradación del medio ambiente, desalojos y reasentamientos forzosos.....	7
B. Vulneraciones de los derechos laborales	9
C. Elusión de las normas mediante la externalización.....	10
D. Alianzas público-privadas.....	11
E. Represalias.....	12
F. Parcialidad en beneficio de las empresas	13
G. ¿Inmunidad del Banco Mundial frente a litigios en los tribunales nacionales?	15
H. Agencias de calificación crediticia	16
I. Investigaciones en curso	16
IV. Buenas prácticas.....	16
A. Marco Ambiental y Social	17
B. Panel de Inspección	18
C. Adopción de medidas preventivas y correctivas.....	20
D. Asesor en Cumplimiento/Ombudsman	20
V. Reflexiones para el futuro	22
VI. Conclusiones y recomendaciones.....	24
Anexos	27
Bibliografía.....	51

I. Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 33/3 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo invitó al Experto Independiente a proseguir su labor de investigación sobre los efectos que tenían para un orden internacional democrático y equitativo las políticas financieras y económicas aplicadas por las organizaciones internacionales y otras instituciones, en particular el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

2. Tras una consulta de expertos organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra en octubre de 2016, el Experto Independiente decidió centrar su informe dirigido al Consejo en el Banco Mundial, y dedicar su informe destinado a la Asamblea General a las cuestiones relativas al Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos informes deben leerse conjuntamente, teniendo presente que en el siglo XXI no existen “zonas sin derechos humanos”¹, que todos los Estados, organizaciones internacionales y agentes no estatales deben respetar el derecho internacional consuetudinario de los derechos humanos y que la llamada “fragmentación” del derecho internacional no puede dar lugar a “régimenes independientes” o “agujeros negros jurídicos”.

3. Aunque las instituciones financieras internacionales pueden promover los derechos humanos e impulsar el desarrollo, algunas de sus políticas han ocasionado la erosión de un entorno de respeto de los derechos humanos en algunos países, especialmente al favorecer políticas neoliberales que debilitan el sector público e impiden a los Estados cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de los tratados de derechos humanos en las esferas de la educación, la atención de la salud, las normas laborales y el derecho a un nivel de vida adecuado. Además, al financiar a empresas que evaden impuestos, el Banco Mundial contribuye al desvío de recursos públicos que podrían destinarse a los servicios públicos. El aumento del apoyo del Banco a las alianzas público-privadas potencia el sector privado en detrimento de las comunidades, especialmente cuando las inversiones fracasan y generan mayores gastos para los gobiernos. En adelante, las instituciones financieras internacionales deberían adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en lo relativo a los préstamos, consultar a los interesados, llevar a cabo evaluaciones de los efectos, adoptar medidas para combatir las represalias, luchar contra la corrupción y asumir sus responsabilidades jurídicas renunciando a la “inmunidad absoluta”.

4. El Experto Independiente cree que, dado que el Banco Mundial y el FMI tienen acuerdos de asociación con las Naciones Unidas, deben ayudar a la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) a promover los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, así como los derechos humanos y el desarrollo sostenible, respetando la igualdad soberana de los Estados y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Cabe recordar que los Estados miembros del Banco Mundial y el FMI también son Estados partes en numerosos tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que deben velar por que las políticas de las instituciones financieras y los proyectos a los que apoyan no tengan repercusiones negativas para los derechos humanos².

5. Teniendo en cuenta que los Estados están obligados a garantizar que los inversores y las empresas transnacionales no cometan violaciones de los derechos humanos³, los Estados

¹ Véanse www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16517&LangID=E y www.nytimes.com/2016/06/27/opinion/the-world-bank-should-champion-human-rights.html.

² Véase el texto del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional y publicado en el informe sobre su 63^{er} período de sesiones (A/66/10), párr. 87.

³ Véanse los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”.

deberían utilizar su influencia para fortalecer los regímenes de derechos humanos cuando negocien con los gobiernos acuerdos de financiación de proyectos concretos⁴. A este respecto, el Experto Independiente recuerda los compromisos contraídos en 2015 por los Estados en la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, así como la aprobación por la Asamblea General de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (véase la resolución 70/1 de la Asamblea General). En la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, aprobada en 2015, también se exhorta a todos los bancos de desarrollo a que establezcan o mantengan sistemas de salvaguardias sociales y ambientales (véase la resolución 69/313 de la Asamblea General, anexo, párr. 75).

6. En enero de 2016, el Experto Independiente envió cuestionarios al Banco Mundial, al FMI, a los Estados, a organizaciones intergubernamentales y a organizaciones no gubernamentales (ONG) (véase el anexo I). Agradece sinceramente la cooperación de todos ellos y los numerosos datos estadísticos y explicaciones que recibió.

7. En abril de 2017, el Experto Independiente asistió a varios actos celebrados en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI, mantuvo intercambios bilaterales con abogados y economistas de ambas instituciones y entabló contacto con organizaciones de la sociedad civil. Refrenda los estudios e informes pertinentes del ACNUDH y de los titulares de mandatos de procedimientos especiales que se han centrado en múltiples aspectos de la labor de las instituciones financieras internacionales (véase el anexo II). Se apoya en los informes sustantivos elaborados por ONG⁵ y por académicos.

8. El Grupo del Banco Mundial está integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Asociación Financiera Internacional (AIF), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Desde 2012 preside el Grupo Jim Yong Kim. El presente informe se centra en la labor del BIRF y la CFI.

9. Las publicaciones del Grupo del Banco Mundial ponen de manifiesto que el Grupo es consciente de las repercusiones de su labor en los derechos humanos. La evolución del propio marco de evaluación social del Banco refleja el reconocimiento de las responsabilidades del Banco en materia de derechos humanos. En el presente informe no se pretende comunicar al Banco lo que ya sabe o señalarle cuestiones que ya están tratando de abordar sus expertos; se aspira a formular recomendaciones realistas, desde un enfoque basado en los derechos humanos. En relación con esto, deberían modificarse los Convenios Constitutivos del Banco a fin de integrar en ellos la promoción de los derechos humanos, y la Junta de Gobernadores debería emitir directrices para transversalizar una perspectiva de derechos humanos. Convendría revisar la declaración de objetivos del Banco para conciliar las prioridades económicas y financieras con los derechos humanos⁶. Incluso las palabras escritas en el gran muro del vestíbulo del Banco (“Nuestro sueño es un mundo sin pobreza”) constituyen un llamamiento a la acción.

10. A lo largo de los últimos 60 años, las actividades de la CFI, que se estableció en 1956 y es la entidad del Banco Mundial que se ocupa de los préstamos al sector privado, han provocado más críticas que las que suelen dirigirse contra el Banco. También se formulan declaraciones idealistas en su sitio web, en el que se hace alarde de que la misión del Banco “es luchar contra la pobreza con pasión y profesionalismo para obtener resultados duraderos”⁷. El Experto Independiente está de acuerdo en que se trata de un objetivo alcanzable.

⁴ Véase el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2, párr. 1.

⁵ Véanse www.oxfam.org/en/tags/world-bank y www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-10-03/new-links-expose-world-bank-group-investments-and-human-rights.

⁶ Véase www.youtube.com/watch?v=TyOUputeq2Y.

⁷ Véase www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/IFC+Governance.

II. Aspectos positivos

11. El Banco Mundial observa que “el desarrollo sostenible es el reconocimiento de que el crecimiento debe ser, a la vez, inclusivo y ambientalmente racional para reducir la pobreza, fomentar una prosperidad compartida para la población actual y atender a la vez a las necesidades de las generaciones futuras. Se basa en una utilización eficiente de los recursos y en una planificación rigurosa que permite generar beneficios tanto inmediatos como a largo plazo para la población y para el planeta, así como prosperidad”⁸.

12. Con ese fin, en 2006 el Banco aprobó su Marco Ambiental y Social, que comprende los siguientes elementos:

- Un planteamiento para el desarrollo sostenible, en el que se enuncian las aspiraciones del Banco respecto de la sostenibilidad ambiental y social;
- Una política ambiental y social relativa a la financiación de proyectos, en la que se fijan requisitos obligatorios para los proyectos que apoya el Banco;
- Diez normas ambientales y sociales, en las que se fijan requisitos obligatorios para los prestatarios y los proyectos.

13. En la declaración de principios del nuevo Marco Ambiental y Social se formula una estrategia que “establece los objetivos institucionales de erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en todos sus países asociados”, e incluye metas relacionadas con los derechos humanos, como la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la preservación de los recursos. Las diez normas ambientales y sociales del Marco, concebidas para orientar los proyectos de los prestatarios, se centran en: a) los efectos y riesgos sociales; b) el trabajo y las condiciones laborales; c) la prevención de la contaminación; d) la salud y la seguridad; e) la adquisición de tierras, el uso de la tierra y el reasentamiento involuntario; f) la gestión sostenible de los recursos naturales vivos; g) los pueblos indígenas; h) el patrimonio cultural; i) los intermediarios financieros; y j) la participación de los interesados y la divulgación de información.

14. El planteamiento va más allá de la voluntad de “evitar daños” y tiene por objeto aprovechar al máximo los beneficios en términos de desarrollo. Así pues, cuando en la evaluación ambiental y social de un prestatario se detectan posibles oportunidades de desarrollo asociadas a su proyecto, el Banco examinará con el prestatario la viabilidad de incorporar esas oportunidades al proyecto. Además, el Banco trata de colaborar con los prestatarios para determinar iniciativas y objetivos estratégicos que aborden las prioridades nacionales de desarrollo, y de mantener un diálogo sobre cuestiones ambientales y sociales con los gobiernos donantes, las organizaciones internacionales, los países implicados en los proyectos y la sociedad civil.

15. Se ha dicho mucho sobre la influencia del Banco Mundial en el orden internacional. Algunos observadores afirman que el Banco y el FMI tienen una mayor repercusión en los asuntos mundiales que todas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas juntas. Si bien en la cláusula de supremacía establecida en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas se estipula que la Carta prevalecerá sobre todos los demás acuerdos internacionales, lo cierto es que las instituciones de Bretton Woods no están subordinadas a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad y seguirán teniendo un efecto determinante en los asuntos mundiales, incluido el disfrute de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

16. En el mundo académico, muchos se han dedicado a estudiar los efectos de las políticas del Banco Mundial en los derechos humanos y el orden internacional. Ya en 2003 se adoptaron los Principios Rectores de Tilburg sobre el Banco Mundial, el FMI y los Derechos Humanos⁹. Una conferencia de seguimiento celebrada en la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos, bajo el título “La Globalización y las Obligaciones Transnacionales en materia de Derechos Humanos” dio lugar a la aprobación de los

⁸ Véase www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment/overview.

⁹ Véase Willem van Genugten, *The World Bank Group, the IMF and Human Rights: A Contextualized Way Forward*, Cambridge, Intersentia, 2015.

Principios Rectores de Tilburg-Glothro en 2015 (véase el anexo III). Asimismo, en 2009 el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas publicó los “Principios del Derecho Internacional para Bancos Multinacionales de Desarrollo”¹⁰, en los que varios expertos refutaron el planteamiento de que las instituciones financieras internacionales están de algún modo por encima de la ley y solo han de respetar sus estatutos y constituciones.

17. Debe aclararse el significado de la palabra “desarrollo”, que forma parte del nombre del Banco, en el contexto del Convenio Constitutivo. Hasta la fecha, tanto en la teoría como en la práctica, el Banco ha entendido el desarrollo como el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el incremento del comercio y el aumento del consumo. Los observadores han venido proponiendo una interpretación distinta del desarrollo, según la cual este consistiría en una distribución más equitativa de la riqueza, la seguridad alimentaria, el agua salubre, el saneamiento, la atención de la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Sin embargo, las desigualdades entre los Estados y dentro de ellos han ido en aumento en muchos países, en los que ha crecido el desempleo, especialmente entre los jóvenes, y ha disminuido el nivel de vida.

III. Desafíos

18. Pese a los aspectos positivos que se acaban de reseñar, el Banco y el FMI continúan propugnando una mayor utilización de las soluciones basadas exclusivamente en el mercado, siguiendo el enfoque del “fundamentalismo de mercado” condenado en numerosas ocasiones por Joseph Stiglitz¹¹. En 2016 aumentó la cooperación entre los bancos multilaterales de desarrollo, que centraron sus iniciativas en proyectos de infraestructura de gran envergadura y en el uso de las alianzas público-privadas¹² como medio para eludir un espacio fiscal restringido, esforzándose al mismo tiempo por imponer la llamada flexibilización laboral y otras condiciones obsoletas a los Estados.

19. Como recuerda Naomi Klein en su influyente obra *La doctrina del shock*, el principal problema sigue siendo la adhesión de las instituciones financieras internacionales a la filosofía de la desregulación económica, que retoma los planteamientos de la Escuela de Chicago de Milton Friedman y se caracteriza por la creencia casi religiosa de que la privatización y la desregulación impulsarán el PIB, independientemente de sus ciclos endémicos de subidas y caídas y de la escasa importancia que se otorga a los costos sociales¹³.

20. La sociedad civil lleva muchos años señalando violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas que se benefician de la financiación del Banco Mundial. Entre esas violaciones, que se documentan en numerosas publicaciones, cabe destacar por su gravedad el acaparamiento de tierras, los desalojos violentos, los reasentamientos involuntarios, el trabajo forzoso¹⁴, el trabajo infantil, los abusos sexuales, la contaminación a gran escala, la destrucción del medio ambiente, las represalias contra los defensores de los derechos humanos, la corrupción y el blanqueo de dinero. En el presente informe se resumen algunos casos destacados que son representativos de violaciones generalizadas.

¹⁰ Véase <http://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=free-prior-and-informed-consent>. Véase también Günther Handl, “Multilateral Development Banking”, que puede consultarse en www.meraki-autoworks.com/multilateral-development-banking-environmental-principles-and-concepts-reflecting-general-international.pdf.

¹¹ Véase Joseph Stiglitz, “Moving beyond market fundamentalism to a more balanced economy”, *Annals of Public and Cooperative Economics*, vol. 80, núm. 3, 2009. Véase también www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/the-three-sisters-and-other-institutions/internal-critics-of-the-world-bank-and-the-imf/42796-joseph-stiglitz.html.

¹² Véanse www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships, <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/world-bank-group> y https://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/lp_Health_PPP_1116.pdf.

¹³ Véase www.ipsnews.net/2017/06/east-asian-miracle-myth-making/.

¹⁴ Véase www.theguardian.com/global-development/2017/jun/27/world-bank-funds-linked-to-forced-labour-in-uzbekistan.

21. Poco antes de las Reuniones de Primavera del Banco de abril de 2016, Oxfam publicó un informe titulado “La CFI y los paraísos fiscales”, en el que reveló que 51 de las 68 empresas en las que había invertido la CFI en el África Subsahariana en 2015 utilizaban paraísos fiscales¹⁵. Como se explica en el informe presentado por el Experto Independiente a la Asamblea General en 2016 (A/71/286), esta práctica expone a los países de la región a una pérdida de ingresos fiscales esenciales que podrían utilizar para atender a sus obligaciones en materia de derechos humanos, cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y saldar sus deudas externas. De hecho, la UNCTAD calcula que los países en desarrollo pierden al año 100.000 millones de dólares de los Estados Unidos a causa de la elusión fiscal, lo que entraña una pérdida de financiación para el desarrollo de entre 250.000 y 300.000 millones de dólares en razón de los ingresos y rendimientos no obtenidos¹⁶. Es hora de que el Banco vete los proyectos en que intervengan empresas que no pagan los impuestos que les corresponden.

22. Hay pruebas más que suficientes de que millones de personas se ven perjudicadas por proyectos financiados por el Banco. En un informe de 2015 del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se señala que, entre 2009 y 2013, el Banco inyectó 50.000 millones de dólares a proyectos clasificados con el máximo grado de riesgo por sus posibles impactos sociales o ambientales de carácter “irreversible o sin precedentes”¹⁷. En el informe también se indica que el Banco y la CFI han financiado a empresas y gobiernos acusados de cometer violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas. En algunos casos se continúa financiando a esos prestatarios a pesar de las pruebas¹⁸.

A. Degradación del medio ambiente, desalojos y reasentamientos forzados¹⁹

23. Entre los grupos vulnerables que han sufrido a causa de grandes proyectos de prospección, actividades mineras y madereras y operaciones de empresas hidroeléctricas se encuentran los pueblos indígenas cuyas tierras han sido tomadas o devastadas por la actividad industrial, sin que se les consultara ni se obtuviera su consentimiento libre, previo e informado²⁰.

24. En 2015, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación determinó que los proyectos financiados por el Banco habían provocado el desplazamiento físico o económico de 3,4 millones de personas, entre ellas la población anuak de Etiopía, que fue víctima de una violenta campaña de desalojos masivos financiada mediante el desvío de fondos de un proyecto apoyado por el Banco²¹.

25. En 2016, el Consorcio denunció que el Banco financiaba un proyecto agroindustrial que vulneraba las salvaguardias establecidas para los pueblos indígenas de Tanzania. Tras las protestas masivas de las ONG, el Banco inicialmente dio marcha atrás, pero en marzo de 2016 el Directorio Ejecutivo del Banco concedió al proyecto una exención plena de su

¹⁵ Véase www.oxfam.org/sites/default/files/documents/bn-ifc-tax-havens-110416-embargo-en.pdf. Véanse también www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-04-11/majority-world-banks-private-investments-go-companies-have, www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-12-12/worlds-worst-corporate-tax-havens-exposed-oxfam-report-reveals y www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en.pdf.

¹⁶ Véase UNCTAD, *World Investment Report 2015*, cap. V, que puede consultarse en unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf. Véase también www.taxjustice.net/2015/03/26/unctad-multinational-tax-avoidance-costs-developing-countries-100-billion/.

¹⁷ Véase www.counterpunch.org/2017/03/24/world-bank-declares-itself-above-the-law/.

¹⁸ Véase www.icij.org/blog/2015/04/icijs-world-bank-probe-draws-global-attention.

¹⁹ Alfred de Zayas, “Forced Population Transfer”, en *The Max Planck Encyclopaedia of Public International Law*, Vol. IV, Rüdiger Wolfrum (ed.), Oxford, Oxford University Press, 2012, págs. 165 a 175.

²⁰ Véase la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, arts. 10 y 11, 19, 28, 30 y 32.

²¹ Véanse www.icij.org/blog/2015/04/new-investigation-reveals-34m-displaced-world-bank y <http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandoned/new-evidence-ties-worldbank-to-human-rights-abuses-ethiopia>.

política de salvaguardias (Política Operacional 4.10), lo que sentó un precedente lamentable. Estaba en juego un préstamo de 70 millones de dólares para el Corredor Meridional de Crecimiento Agrícola de Tanzania (SAGCOT), una iniciativa gubernamental que entrañaba el desalojo de los pastores indígenas de la región de Barabaig a fin de transferir tierras agrícolas fértiles a los inversores²². El Consorcio también ha denunciado abusos en el sector de la minería²³, en particular en el contexto de la extracción de oro en el Perú²⁴.

26. La exención de la Política Operacional del Banco sobre los Pueblos Indígenas fue el tema de una comunicación dirigida al Banco en febrero de 2017 por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. En la comunicación se observaba lo siguiente:

El proyecto SAGCOT puede tener repercusiones significativas para los grupos de pastores nómadas y seminómadas que se definen a sí mismos como pueblos indígenas, entre ellos los barbaigs, los datogas, los hadzabes y los masáis, que dependen de tierras comprendidas en las zonas del proyecto para su sustento diario y supervivencia [...] consideramos que es esencial que los proyectos destinados a mejorar la red de seguridad social de Tanzania estén concebidos de tal manera que los pueblos indígenas puedan beneficiarse de ellos [...] y que se consulte debidamente a los pueblos indígenas²⁵.

27. La Relatora Especial y el Experto Independiente concluyeron lo siguiente: “[L]a concesión por el Directorio Ejecutivo de exenciones de la Política Operacional 4.10 [...] resulta problemática tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista operacional. Al dar por sentado el argumento unilateral de que la Política Operacional 4.10 contradice las disposiciones de la constitución nacional [...] [se generan] evidentes lagunas en lo relativo a la protección de los derechos de los grupos indígenas”²⁶.

28. En su respuesta de marzo de 2017, el Banco alegó que “el equipo de preparación del proyecto tuvo en cuenta las recomendaciones de expertos locales e internacionales y representantes de los pueblos indígenas. En particular, el Gobierno convino en elaborar un instrumento de salvaguardias ajustado a los requisitos de la Política Operacional 4.10, conocido como Marco de Planificación para los Grupos Vulnerables (MPGV)”²⁷.

29. Añadió también la siguiente aclaración:

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial analizó el diseño del proyecto y los instrumentos jurídicos, incluidos los convenios legales relativos al MPGV, y aprobó el Proyecto de Inversión del SAGCOT [...] [L]os requisitos de admisibilidad de los subproyectos se han concebido con vistas a limitar las posibles repercusiones de los subproyectos en los derechos a las tierras de las comunidades de las zonas de ejecución: el Proyecto no apoyará inversiones que entrañen la reasignación de tierras de pequeños agricultores a empresas agroindustriales²⁸.

30. Human Rights Watch también ha señalado casos en que el Banco no respetó su propia política de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Documentó, por

²² *Bretton Woods Observer*, otoño de 2016, pág. 7. Puede consultarse en www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf. Véanse también <http://documents.worldbank.org/curated/en/215191467995074230/pdf/103990-SU-P125728-IDA-SU2016-0001-OUO-9.pdf> y www.huffingtonpost.com/entry/world-bank-allows-tanzania-to-sidestep-rule-protecting-indigenous-groups_us_57607769e4b09c926cfd6b1c.

²³ Véase www.brettonwoodsproject.org/2014/06/world-bank-mines-threatening-livelihoods/.

²⁴ Véase <http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandoned/how-worldbank-finances-environmental-destruction-peru>.

²⁵ Véase <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=22932>.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Véase <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=49127>.

²⁸ *Ibid.*

ejemplo, el traslado forzoso de la población seminómada nuer de la región de Gambella, en Etiopía, y observó que existía un vínculo operacional entre los proyectos del Banco Mundial y un programa gubernamental de traslados conocido como “programa de asentamiento en aldeas”. La cuestión se planteó ante el Panel de Inspección del Banco, que efectivamente concluyó que el Banco “no realizó los análisis de riesgos completos requeridos, y sus medidas de mitigación no resultaron suficientes”²⁹.

31. En 2014, el Banco aprobó una subvención de 73 millones de dólares para el proyecto hidroeléctrico de Inga, en la República Democrática del Congo, a pesar de que el Directorio Ejecutivo había detectado “importantes riesgos asociados a la ejecución”. En julio de 2016, el Banco suspendió la financiación. La ONG International Rivers señaló que el Banco ni siquiera debería haber participado en el proyecto, porque “Inga representa[ba] un modelo de desarrollo fallido que elud[ía] a los pobres para beneficiar a la industria extractiva y los mercados de exportación”³⁰.

B. Vulneraciones de los derechos laborales

32. La sociedad civil también ha señalado vulneraciones de los derechos laborales cometidas en relación con proyectos del Banco Mundial. En el informe “Toxic Toil” (“Trabajo Tóxico”) de Human Rights Watch, por ejemplo, se documenta la flagrante vulneración de los derechos del niño que tiene lugar en Tanzania, así como la exposición de los niños que trabajan en el país a la intoxicación por mercurio. En el informe, Human Rights Watch exhorta al sector de la minería aurífera a que establezca un proceso exhaustivo de diligencia debida, con medidas de vigilancia regular, para eliminar el trabajo infantil de las cadenas de suministro³¹.

33. Además, en relación con la investigación llevada a cabo por el Banco para verificar la conformidad con las normas pertinentes de una inversión de la CFI en plantaciones de té de la India, Human Rights Watch observa lo siguiente:

La CFI invirtió millones [...] sin tener en cuenta las graves vulneraciones de los derechos laborales y de otros derechos humanos cometidas en el sector [...]. La CFI no se ocupó de detectar y gestionar riesgos básicos, como las condiciones de vida manifiestamente inadecuadas de los trabajadores y el trabajo infantil [...] [L]as deficiencias de la CFI se han debido en parte a su cultura e incentivos, que miden los resultados en términos financieros y alientan a su personal a “pasar por alto, no señalar o incluso ocultar posibles riesgos ambientales, sociales y de conflictos conexos”³².

34. Además, en ocasiones anteriores, la CFI no evaluó adecuadamente los riesgos asociados a proyectos petroleros y mineros, como en el caso del oleoducto Chad-Camerún, en el que el Chad vació de contenido una ley mediante la que se pretendía destinar ingresos procedentes del petróleo a la educación, la atención de la salud y otras necesidades sociales, y el Banco, finalmente, tuvo que suspender su préstamo al país³³.

35. Aunque el Camerún ha ratificado la mayoría de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los que se regulan el trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores, y aunque los clientes del Banco Mundial están obligados a velar por el cumplimiento de las directrices del Banco sobre salud y seguridad en el trabajo, las vulneraciones de los derechos de los trabajadores continúan sin cesar. Cabe citar, a modo de ejemplo, el caso de la China International Water and Electric Corporation, que participa en el proyecto hidroeléctrico de Lorn Pangor, financiado por el Banco, por el que este

²⁹ Véase www.hrw.org/news/2015/02/23/world-bank-address-ethiopia-findings.

³⁰ *Bretton Woods Observer*, otoño de 2016, pág. 2. Puede consultarse en www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

³¹ Véase www.hrw.org/report/2013/08/28/toxic-toil/child-labor-and-mercury-exposure-tanzania-small-scale-gold-mines.

³² Véase www.hrw.org/news/2016/11/08/world-bank-group-india-tea-investment-tramples-rights.

³³ Véase www.oxfamamerica.org/press/aid-group-lauds-new-world-bank-policies-on-indigenous-rights-and-oil-and-mining-transparency/.

último ha recibido reiteradas denuncias en relación con problemas de gestión ambiental y social. En enero de 2014, en un informe de la Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Camerún se calificó de deplorable la situación de los derechos humanos en el emplazamiento del proyecto. La Electricity Development Corporation del Camerún y el inspector de trabajo no obligaron a la compañía china a respetar la legislación laboral³⁴.

C. Elusión de las normas mediante la externalización

36. A los daños directos causados por algunos proyectos del Banco Mundial hay que sumar las denuncias de la sociedad civil de que el Banco ha estado financiando indirectamente, a través de bancos intermediarios, a empresas que no respetan los derechos humanos. Un ejemplo de financiación discreta o “invisible” fue el de la concesión de fondos de la CFI a seis bancos comerciales indios que, a su vez, financiaban a empresas que cometían abusos. Inclusive Development International (IDI) señaló lo siguiente:

Entre los beneficiarios indirectos de fondos de la CFI se encuentran Vedanta Resources, NHPC Limited y Jindal Steel & Power, cuya complicidad en violaciones graves de los derechos humanos y prácticas destructoras del medio ambiente está abundantemente documentada. Estas empresas tienen pocas posibilidades de recibir asistencia directa de la CFI. Sin embargo, al externalizar sus fondos para el desarrollo a bancos comerciales con fines de lucro, la CFI está [...] obstruyendo el escrutinio público de su financiación. Así, la CFI apenas vigila de qué modo se utilizan sus fondos³⁵.

37. IDI ha descubierto 68 empresas o proyectos indios causantes de graves daños al medio ambiente o implicados en prácticas contrarias a los derechos humanos que recibieron financiación de intermediarios de la CFI. Como señala IDI en su informe, “estamos observando una tendencia preocupante —no solo en el Banco Mundial, sino también en otros bancos de desarrollo— de concesión de préstamos sin vigilancia a través de terceros para proyectos en los que, por lo general, esos bancos nunca participarían. A la vez, el Banco se está lavando las manos de los crecientes costos ambientales y humanos que afectan a los bosques, los ríos y las comunidades”³⁶.

38. En la misma línea, en una nota informativa de Oxfam de octubre de 2016 se indica lo siguiente:

En los seis últimos años, la Corporación Financiera Internacional ha inyectado más de 50.000 millones de dólares al sector financiero, y sus inversiones a largo plazo en intermediarios financieros como los bancos comerciales y los fondos de capital-inversión han aumentado drásticamente en un 45% [...]. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que [...] el Grupo del Banco Mundial apenas tiene control sobre el modo en que se gasta gran parte de ese dinero. Esta falta de rendición de cuentas está teniendo efectos devastadores en muchas comunidades pobres³⁷.

39. Aunque se están logrando algunos avances, como observó Oxfam al final de la reunión de 2017 del Banco Mundial y el FMI, se podría hacer más: “[E]s alentador que la CFI se haya comprometido a mejorar la vigilancia y a ser más selectiva respecto de sus inversiones en intermediarios financieros de alto riesgo. [...] Lo que seguimos esperando, y

³⁴ *Bretton Woods Observer*, otoño de 2016, pág. 3. Puede consultarse en www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

³⁵ Véanse www.inclusivedevelopment.net/new-report-reveals-the-world-banks-murky-financial-entanglements-with-indias-most-irresponsible-corporations/ y www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2017/04/Outsourcing-Development-India.pdf.

³⁶ Véase www.inclusivedevelopment.net/new-report-reveals-the-world-banks-murky-financial-entanglements-with-indias-most-irresponsible-corporations/.

³⁷ Véase www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bn-ifc-owning-outcomes-031016-en_0.pdf.

que resulta fundamental, es transparencia por parte de la CFI en cuanto al verdadero destino final de su dinero³⁸.

D. Alianzas público-privadas

40. Muchas organizaciones de la sociedad civil han denunciado la aparente voluntad del Banco de promover las alianzas público-privadas, pese a las dificultades que estas plantean para el espacio normativo de los gobiernos, especialmente en las esferas del abastecimiento de agua salubre y el saneamiento, los servicios de salud y la educación. De hecho, el año 2016 se caracterizó por la intensificación del impulso a los megaproyectos y las alianzas público-privadas³⁹.

41. Sin embargo, la experiencia demuestra que las alianzas público-privadas no han beneficiado a los países en desarrollo. Por ejemplo, parece que la principal alianza público-privada de la CFI en la esfera de la salud amenaza con obstruir los programas de atención de la salud en Lesotho. En 1999 se construyó el Queen Mamohato Memorial Hospital, un nuevo hospital gestionado por el sector privado y financiado mediante un préstamo de la CFI, para reemplazar el antiguo hospital público principal de Lesotho. El país se encuentra atado por un contrato de 18 años que ya consume más de la mitad del presupuesto de salud nacional, a la vez que genera grandes beneficios al asociado privado⁴⁰. Esto supone un peligroso desvío de los escasos fondos públicos que podrían destinarse a los servicios de atención primaria de la salud de las zonas rurales, donde viven las tres cuartas partes de la población. Además de conllevar un alto riesgo y grandes costos, las alianzas público-privadas no promueven el objetivo de la cobertura sanitaria universal y equitativa.

42. En otro caso ilustrativo, en agosto de 2016 el Ministro de Educación de Uganda anunció el cierre de 63 guarderías y centros de educación primaria gestionados por Bridge International Academies, un proveedor privado de servicios de enseñanza parcialmente financiado por la CFI. El Ministro señaló que la decisión se había adoptado en vista del “peligro derivado de la falta de higiene y saneamiento para la vida y la seguridad de los niños inocentes”⁴¹.

43. Asimismo, en su respuesta al cuestionario enviado por el Experto Independiente, Open Society Foundations-Armenia observó que, pese a la inversión de más de 100 millones de dólares destinada a apoyar el sistema educativo armenio, apenas se habían registrado mejoras o repercusiones sistémicas a raíz de la intervención de una alianza público-privada de educación financiada por el Banco. Al contrario, los préstamos habían contribuido a acentuar las desigualdades en el acceso a la educación de calidad. En otro ejemplo del contexto europeo, tras analizar el uso de las alianzas público-privadas en Portugal, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que solo debía optarse por esas alianzas cuando supusieran “un buen aprovechamiento de los fondos, y no porque permit[ieran] al Gobierno escapar de las restricciones presupuestarias acumulando pasivos fuera de balance”⁴². Resulta preocupante que, sin embargo, la OCDE haya seguido respaldando las alianzas público-privadas y haya afirmado que “el Gobierno debería considerar la posibilidad abarcar a las alianzas público-privadas locales y a los sectores del agua, el alcantarillado y los desechos”⁴³.

³⁸ Véase www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/no-breakthrough-big-issues-spring-meetings.

³⁹ Véanse www.brettonwoodsproject.org/2017/02/bank-imf-2016-year-review/ y www.brettonwoodsproject.org/2017/04/world-bank-undermines-right-universal-healthcare/.

⁴⁰ Véase www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion.

⁴¹ *Bretton Woods Observer*, otoño de 2016, pág. 2. Puede consultarse en www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

⁴² Véase www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-portugal-2012_eco_surveys-prt-2012-en, pág. 26.

⁴³ www.oecd.org/eco/surveys/Portugal-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf, pág. 25.

E. Represalias

44. Aunque los bancos de desarrollo reconocen cada vez más la importancia de contar con la participación ciudadana para lograr un desarrollo efectivo, un número creciente de gobiernos han puesto en marcha campañas de amplio alcance, a veces muy duras, con vistas a cerrar el espacio para las actividades de la sociedad civil, llegando en algunos casos a tipificar como delito la labor independiente en la esfera de los derechos humanos⁴⁴. Esas medidas abusivas impiden a las personas participar en la adopción de decisiones, oponerse públicamente a los proyectos de desarrollo que puedan afectar a sus medios de subsistencia y protestar por las iniciativas que resulten ineficaces.

45. En su respuesta al cuestionario enviado por el Experto Independiente⁴⁵, Human Rights Watch observó que las instituciones financieras internacionales habían hecho poco para prevenir las represalias contra quienes criticaban los proyectos que ellas financiaban. En un informe de 2015 de Human Rights Watch sobre las represalias por las críticas a proyectos del Grupo del Banco Mundial se reseñan las represalias tomadas por los gobiernos y por empresas poderosas contra personas que criticaron proyectos del Banco en Camboya, la India, Uganda, Uzbekistán y otros países⁴⁶.

46. Un defensor de los derechos humanos uzbeko, exiliado tras haber señalado la cuestión del trabajo forzoso en proyectos que beneficiaban al sector algodonero de su Gobierno, afirmó: “[E]l Banco Mundial no ha adoptado medidas relevantes para garantizar que los defensores independientes de los derechos humanos como yo podamos vigilar los abusos vinculados a los proyectos que financia. El personal del Banco tampoco ha denunciado los ataques del Gobierno contra mis colegas y contra mí”⁴⁷. El defensor, cuyo caso se planteó al Gobierno de Uzbekistán por conducto de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, fue presuntamente detenido y maltratado en razón de su labor de vigilancia del sector⁴⁸, aunque el Gobierno lo niega⁴⁹.

47. Human Rights Watch también documenta que en Azerbaiyán, pese a la intervención de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas⁵⁰, que convenció al Gobierno de que debía poner fin a su represión contra los agentes independientes de la sociedad civil, y pese a que el Banco hizo suya esa recomendación, la financiación de proyectos no se detuvo⁵¹.

48. Además, es habitual que las empresas tomen represalias contra los indígenas y otras personas que se manifiestan contra el acaparamiento de tierras y la contaminación. Uno de los casos más notorios, planteado en múltiples ocasiones por los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, es el de Berta Cáceres, que fue asesinada en marzo de 2016⁵². Dos de los acusados por su asesinato eran empleados de una empresa que participaba en la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto que no estaba financiado por el Banco, pero recibía fondos de bancos de los Países Bajos, Finlandia y América Central. Aunque el Banco no era responsable de la financiación de ese proyecto, se vio tan afectado por las reacciones de indignación colaterales que tuvo que emitir un

⁴⁴ Véase www.hrw.org/news/2016/07/14/defending-human-rights-development.

⁴⁵ Véase www.hrw.org/news/2017/04/25/human-rights-watch-submission-re-international-financial-institutions-and-human.

⁴⁶ Human Rights Watch, *At Your Own Risk: Reprisals against Critics of World Bank Group Projects*, 2015. Puede consultarse en www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/worldbank0615_4up.pdf.

⁴⁷ Véase www.hrw.org/news/2016/07/14/defending-human-rights-development.

⁴⁸ Véase <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=19586>.

⁴⁹ Véase <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=48790>.

⁵⁰ Véase <https://eti.org/>.

⁵¹ Human Rights Watch, *Harassed, Imprisoned, Exiled: Azerbaijan's Continuing Crackdown on Government Critics, Lawyers, and Civil Society*, 2016. Puede consultarse en www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/azerbaijan1016_web.pdf.

⁵² Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19805. Véanse también las comunicaciones públicas sobre el caso, y las correspondientes respuestas de los gobiernos, que se pueden consultar en la base de datos en línea de las comunicaciones de los procedimientos especiales: <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

comunicado de prensa, en el que el Presidente del Banco, Jim Yong Kim, formuló la siguiente declaración:

Deploramos el elevado grado de temor y violencia prevalente en Honduras. El caso de Berta Cáceres se suma a los de las decenas de activistas ambientales que han sido asesinados en los seis últimos años. Instamos al Gobierno a que haga frente al conflicto de tierras profundamente enraizado en la región y ponga fin a la violencia. Sabemos que la adopción de políticas ambientales y sociales sólidas es fundamental para alcanzar nuestros objetivos de erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Por eso es tan importante que las voces de personas como Berta no sean silenciadas⁵³.

49. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se refirió a esta cuestión:

Durante el año transcurrido, al menos otros seis activistas fueron asesinados en Honduras, entre ellos [...] el líder del pueblo indígena tolupán, José de los Santos Sevilla. Otros siete fueron asesinados en Colombia, Guatemala y México en una sola semana, en enero, en relación con proyectos hidroeléctricos, de minería y agroindustriales [...]. Además de los asesinatos, también se emplean como instrumentos de represión las restricciones a las reuniones pacíficas, las medidas drásticas contra las ONG, los ataques contra los medios de comunicación independientes, la censura estatal, una legislación antiterrorista draconiana, la denigración promovida por el Estado, la vigilancia, las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones. En algunos países se han aprobado leyes punitivas y se han creado organismos de seguridad pública especiales expresamente para proteger los intereses de los inversores⁵⁴.

F. Parcialidad en beneficio de las empresas

50. En 2002, el Banco puso en marcha el proyecto Doing Business⁵⁵, con el objetivo de establecer una clasificación de los países en función del grado en que la normativa nacional favorece la “facilidad para hacer negocios”. Desde su creación, el proyecto fue criticado por promover la desregulación y la flexibilización de las normas sociales y ambientales. El Banco respondió eliminando el indicador relativo al “empleo de trabajadores” del sistema de puntuación del proyecto, ya que atentaba contra las normas laborales y los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores⁵⁶. El Oakland Institute ha censurado este y otros indicadores de referencia problemáticos, como el relativo al “pago de impuestos”, que recompensa la reducción de todos los tipos de impuestos sobre las sociedades, incluidos los impuestos ambientales y sociales recaudados para proteger a los ciudadanos y el planeta⁵⁷. En el informe más reciente sobre el proyecto Doing Business se señalan, de hecho, como “reformas positivas”, la abolición de las tasas de protección ambiental que debían pagar las empresas en España⁵⁸ y Viet Nam⁵⁹, y se encomia la reducción de los impuestos del sector privado en un total de 28 países⁶⁰. Otro ejemplo de injerencia incomprensible en el espacio normativo necesario de los Estados es la mala puntuación otorgada a Tanzania como “castigo” por establecer una carga tributaria obligatoria que deben pagar los empleadores para la indemnización de los trabajadores⁶¹, y

⁵³ Véase www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples/brief/honduras-and-indigenous-people.

⁵⁴ Véase www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article136884218.html.

⁵⁵ Véase www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017.

⁵⁶ Véanse www.doingbusiness.org/Methodology/Changes-to-the-Methodology, www.ituc-csi.org/ituc-calls-on-world-bank-to?lang=en, www.law.cornell.edu/uscode/text/22/262p%E2%80%93939 y old.brettonwoodsproject.org/update/70/bwupdt70_ai.pdf.

⁵⁷ Véase www.oaklandinstitute.org/blog/world-bank%E2%80%9399s-doing-business-rankings-relinquishing-sovereignty-good-grade.

⁵⁸ Véase www.doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/spain.

⁵⁹ Véase www.doingbusiness.org/reforms/overview/economy/vietnam.

⁶⁰ Véase www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes.

⁶¹ Véase www.doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/tanzania.

la mala nota asignada a Malta por aumentar el nivel máximo de la contribución de los empleadores a la seguridad social⁶².

51. Sobre la base del modelo de Doing Business, en 2013 el Banco puso en marcha el proyecto Enabling the Business of Agriculture. En el marco de este proyecto se otorga una puntuación a los países en función de una serie de “buenas prácticas normativas” relacionadas con la agricultura, que miden, en particular, el grado en que los gobiernos facilitan la importación y distribución de fertilizantes químicos, respetan los derechos de propiedad intelectual aplicables a la agricultura⁶³, permiten a las empresas privadas de semillas aumentar sus beneficios o facilitan la comercialización de semillas industriales en detrimento de las producidas e intercambiadas por los agricultores, que son más baratas y diversas y se pueden obtener fácilmente en los países en desarrollo.

52. Esos índices son seguidos por los inversores y utilizados por el Banco y los donantes bilaterales para orientar su financiación. El departamento de Inversión para el Clima⁶⁴ del Banco brinda asesoramiento a los países atendiendo a las puntuaciones que han recibido en el marco del proyecto Doing Business. Según el Oakland Institute, “en muchos países esas intervenciones han ayudado a crear organismos ‘de ventanilla única’ para atraer la inversión extranjera directa, en particular ofreciendo arrendamientos de tierras baratos, acceso al suministro de agua e incentivos fiscales a las empresas”⁶⁵. Si bien no hay pruebas científicas⁶⁶ que respalden la selección de temas para los indicadores de referencia de los proyectos Doing Business y Enabling the Business of Agriculture, ni que demuestren su eficacia en la lucha contra la pobreza, el Banco se sirve de esos índices para promover cambios de políticas en todo el mundo.

53. Resulta significativo que más de 280 organizaciones de la sociedad civil, grupos de agricultores, sindicatos y centros de estudio hayan apoyado la campaña “Our Land Our Business” del Oakland Institute, mediante la que se denuncia la práctica del Banco de imponer conjuntos normativos y estandarizados de reformas⁶⁷.

54. Poco antes de que el Banco publicara, en 2017, su informe titulado “Enabling the Business of Agriculture”⁶⁸, 157 organizaciones y académicos de todo el mundo criticaron “el plan del Banco para apropiarse de los derechos de los agricultores a las semillas, y el atentado contra la soberanía alimentaria y el medio ambiente”⁶⁹. En la declaración se denuncia que “[el informe] dicta supuestas ‘buenas prácticas’ para regular la agricultura y asigna puntuaciones a los países en función del grado en que siguen sus instrucciones”. Sin embargo, como añade el Oakland Institute, en realidad “[el informe] se ha convertido en el instrumento más novedoso para impulsar políticas agrarias proempresariales, particularmente en el sector de las semillas”.

⁶² Véase www.doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/malta.

⁶³ Alice Martin-Prével, “Down on the seed: the World Bank enables corporate takeover of seeds”, Oakland, California, Oakland Institute, 2017. Puede consultarse en www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/down-on-the-seed.pdf.

⁶⁴ Véase www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/brief/investment-climate.

⁶⁵ Carta al Experto Independiente de 6 de marzo de 2017.

⁶⁶ Véanse T. Manuel y otros, “Independent panel review of the Doing Business report”, 2013, que puede consultarse en <http://hendrikwolff.com/web/Doing%20business%20review%20panel%20report%20with%20signatures%20and%20Bibliography.pdf>, y www.socialwatch.org/sites/default/files/Joint-statement-Our-Land-Our-Business.pdf.

⁶⁷ Véanse www.oaklandinstitute.org/our-land-our-business, www.oaklandinstitute.org/world-bank-fuels-land-grabs-africa-through-shadowy-financial-sector-investments y www.oaklandinstitute.org/world-bank-sides-agribusinesses-against-farmers-indigenous-communities.

⁶⁸ Véase <http://eba.worldbank.org/>.

⁶⁹ Véase www.oaklandinstitute.org/civil-society-denounces-world-banks-scheme-hijack-farmers-rights-seeds.

G. ¿Inmunidad del Banco Mundial frente a litigios en los tribunales nacionales?

55. Hasta ahora, el Banco Mundial ha estado protegido contra toda responsabilidad por la comisión de violaciones de los derechos humanos en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados⁷⁰. No obstante, puesto que el derecho internacional evoluciona, y al igual que se flexibilizó el principio de la inmunidad del Jefe de Estado a raíz de la orden de detención dictada contra Pinochet en 1998⁷¹, ha llegado la hora de exigir cuentas a las instituciones financieras internacionales por los daños derivados de sus prácticas de préstamo y su inobservancia de la diligencia debida.

56. EarthRights International, un grupo no gubernamental de defensa del medio ambiente, ha interpuesto dos demandas contra la CFI ante los tribunales federales de los Estados Unidos⁷², en las que afirma que la inmunidad absoluta es un anacronismo⁷³. La primera, *Jam v. International Finance Corporation*, se planteó a los tribunales de primera instancia y de apelación de Washington D.C. en relación con los efectos negativos de la central térmica de carbón de Tata en Mundra, en la India⁷⁴. En este caso, la CFI había proporcionado 450 millones de dólares para una central eléctrica, la cual, como demostraron los demandantes, había degradado el medio ambiente y destruido sus medios de subsistencia. Aunque hasta ahora los tribunales han sostenido que la CFI goza de inmunidad absoluta⁷⁵, los demandantes siguen impugnando la decisión y, a la fecha de redacción del presente informe, se disponen a solicitar autorización para presentar sus argumentos ante el pleno, es decir, ante el conjunto de todos los jueces del tribunal de apelación de Washington D.C.⁷⁶.

57. En la segunda demanda, *Juana Doe v. IFC*, EarthRights responsabiliza al Banco de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por Dinant, una extensa plantación de palma aceitera acusada de prácticas violentas de acaparamiento de tierras, actos de intimidación y asesinatos de indígenas en la región hondureña de Bajo Aguán⁷⁷. En la demanda se alega que desde mediados de los años noventa, la CFI, junto con un intermediario financiero, la IFC Asset Management Corporation, ha invertido millones de dólares en empresas hondureñas productoras de aceite de palma. Varias cooperativas agrícolas llevan casi 20 años impugnando los derechos de Dinant sobre 16 plantaciones de palma, alegando que esas tierras les fueron sustraídas mediante fraude, coacción y violencia o amenazas de violencia. Por su parte, EarthRights sostiene que la CFI ha “proporcionado, de forma reiterada y sistemática, una financiación de importancia clave a Dinant, a sabiendas de que esta estaba dirigiendo una campaña de violencia, terror y desposesión contra los agricultores, y de que su dinero se iba a utilizar para facilitar la comisión de violaciones manifiestas de los derechos humanos”. Los demandantes citan fuentes del Gobierno de los Estados Unidos para fundamentar las alegaciones de que desde 2009 han sido asesinados más de 100 agricultores⁷⁸. Además, la demanda se basa en parte en informes del mecanismo de vigilancia interno de la CFI, la Oficina del Asesor en

⁷⁰ Véase August Reisch, ed., *The Privileges and Immunities of International Organizations in Domestic Courts*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

⁷¹ Véase www.globalpolicy.org/component/content/article/163/29411.html.

⁷² Véase www.earthrights.org/sites/default/files/documents/jam_v_ifc_-_appellant_reply_brief.pdf.

⁷³ Véase www.brettonwoodsproject.org/2016/04/ifc-claims-absolute-immunity-to-avoid-justice-but-will-it-hold-up-in-court/. Véase también Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *McElhinney v. Ireland*, demanda núm. 31253/96, sentencia de 21 de noviembre de 2001 (opinión disidente del juez Loucaides).

⁷⁴ Véase http://d2zyt4oqqla0dw.cloudfront.net/sites/default/files/documents/ifc_tata_mundra_complaint.pdf.

⁷⁵ Véanse <http://www.allgov.com/india/news/top-stories/world-bank-cant-be-sued-rules-us-judge-in-denying-gujarati-villagers-lawsuit-160408?news=858610j> y <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cadc/16-7051/16-7051-2017-06-23.html>.

⁷⁶ Véase www.earthrights.org/media/federal-appeals-court-rules-world-bank-group-cannot-be-sued-harming-communities-0.

⁷⁷ Véase www.earthrights.org/media/honduran-farmers-sue-world-bank-group-human-rights-violations.

⁷⁸ Véase <https://systemicdisorder.wordpress.com/2017/03/22/world-bank-beyond-law/>.

Cumplimiento/Ombudsman (véanse la secc. IV. D y el anexo VII), que concluyó que el Banco no había detectado o había pasado por alto deliberadamente el grave contexto social, político y de derechos humanos al ejecutar el proyecto.

H. Agencias de calificación crediticia

58. Todo ejercicio de poder, incluido el poder económico, debe estar sujeto a controles democráticos, requisitos de transparencia y rendición de cuentas. Muchos países creen que la asignación de calificaciones crediticias incorrectas, o incluso deliberadamente falsas, y el uso de métodos de calificación cuestionables contribuyeron de manera determinante a la crisis financiera de Asia⁷⁹ y, más recientemente, a la crisis financiera mundial de 2007-2008⁸⁰. Es evidente que se necesitan reformas, pero parece que el Banco sigue sin ocuparse de las repercusiones de esas instituciones, cuyas calificaciones influyen en sus decisiones de conceder o denegar préstamos. En opinión del Experto Independiente, el Banco tiene la obligación de comprobar la fiabilidad de las calificaciones asignadas por organismos del sector privado, o crear sus propios mecanismos e instituciones de calificación⁸¹ que puedan desempeñar su función de forma más objetiva y eficaz⁸².

I. Investigaciones en curso

59. Sin lugar a dudas, el Banco Mundial encierra un enorme potencial benéfico, y su plantilla de brillantes juristas y economistas es capaz de concebir políticas y mecanismos para promover simultáneamente el crecimiento económico y los derechos humanos. En muchos de sus estudios se reconoce la importancia fundamental de los derechos humanos para el desarrollo y se formulan recomendaciones al respecto. Sin embargo, esas recomendaciones no siempre se siguen en la práctica.

60. Ahora bien, algunos materiales producidos por los investigadores del Banco Mundial no se libran de las críticas. La organización ambiental y de justicia social Action for Solidarity Environment Equality and Diversity Europe⁸³ observa lo siguiente:

El Banco Mundial es una institución que cuenta con uno de los mayores presupuestos de investigación de todo el mundo y no tiene rival en el ámbito de la economía del desarrollo. [...] Varios investigadores y académicos han cuestionado la fiabilidad de las investigaciones encargadas por el Banco Mundial. [...] Acerca de la serie del Informe sobre el Desarrollo Mundial, por ejemplo, Nicholas Stern, profesor de economía de la Universidad de Oxford y ex economista jefe del Banco Mundial, señala que muchos de los datos utilizados por el Banco proceden de fuentes muy dudosas, o se han calculado de tal manera que uno se plantea si conviene emplearlos⁸⁴.

61. Puesto que el Banco es consciente de esas críticas, cabe esperar que el paradigma cambie pronto.

IV. Buenas prácticas

62. Desde hace varios decenios, los derechos humanos se han ido erigiendo en una prioridad global que el Banco Mundial ya no desatiende. En el año 2000 se fijó la enseñanza primaria universal como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

⁷⁹ Naomi Klein, *The Shock Doctrine*, Londres, Penguin Books, 2008, págs. 267 a 276 y 426.

⁸⁰ Véase http://unctad.org/en/Docs/osgdp20081_en.pdf.

⁸¹ Véase <http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/health/should-world-bank-issue-credit-ratings>.

⁸² Jonathan Katz, Emanuel Salinas y Constantinos Stephanou, "Credit rating agencies", en *Crisis Response*, nota núm. 8, octubre de 2009. Puede consultarse en <http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1303327122200/Note8.pdf>. Véase también www.counterpunch.org/2017/06/07/muslims-are-very-strange-people/.

⁸³ Véase www.aseed.net/pdfs/ASEED_Report_on_Worldbank_Conditionalities.pdf.

⁸⁴ Véase www.counterpunch.org/2017/03/24/world-bank-declares-itself-above-the-law/.

En 2011 se aprobaron los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos⁸⁵. En 2013, el Banco y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se propusieron alcanzar la cobertura sanitaria universal. En 2015, el Banco y la OIT acordaron un conjunto integrado de políticas concebidas para garantizar la seguridad de los ingresos y el apoyo a todas las personas a lo largo del ciclo vital, conocido como la Misión Común de la OIT y del Grupo Banco Mundial en pro de una Protección Social Universal⁸⁶. Además, el Banco es plenamente consciente de la importancia de las cuestiones ambientales, y se están adoptando medidas al respecto, como la aprobación del Plan de Acción para el Clima, destinado a ayudar a los Estados a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Acuerdo de París concertado en el 21^{er} período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático⁸⁷.

A. Marco Ambiental y Social

63. En abril de 2016, tras un proceso de cuatro años, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un nuevo Marco Ambiental y Social para reemplazar las salvaguardias existentes⁸⁸. El Experto Independiente acoge con satisfacción el Marco, que podrá servir de base para promover más avances. Por ejemplo, la nueva política sobre el consentimiento libre, previo e informado establece una norma para las empresas y las instituciones financieras, incluidos los 72 organismos de crédito a la exportación y bancos privados adheridos a los Principios del Ecuador (un conjunto de directrices de aceptación voluntaria para la detección y la gestión de los riesgos sociales y ambientales asociados a los proyectos financiados)⁸⁹. Sin embargo, aunque la política sobre el consentimiento libre, previo e informado del nuevo Marco Ambiental y Social fija el requisito del consentimiento colectivo, es importante velar también por que no se desatiendan las opiniones de las minorías.

64. Incluso quienes critican duramente al Banco Mundial han reconocido el potencial del nuevo Marco, que, en particular, dispone que los clientes de la CFI deberán obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas antes de iniciar actividades de desarrollo. Según observó el Presidente de Oxfam América: “[L]a CFI ha sido muy criticada por financiar proyectos potencialmente peligrosos desde el punto de vista social y ambiental que, en algunos casos, han afectado negativamente a las comunidades locales, pero los esfuerzos de la CFI por mejorar sus políticas de préstamo suponen un avance en la dirección correcta”. El Director Ejecutivo de Oxfam Australia señaló: “[L]a versión revisada del Marco de Sostenibilidad de la CFI puede contribuir a que los pueblos indígenas obtengan la parte que les corresponde de la riqueza derivada de los recursos naturales, particularmente en las economías emergentes y los países proclives a los conflictos”⁹⁰.

65. Si bien es cierto que muchos de los elementos del Marco Ambiental y Social son positivos y que habrá juristas ingeniosos que exijan mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, las organizaciones de la sociedad civil han señalado algunas deficiencias lamentables⁹¹, como la falta de un compromiso vinculantes para proteger los derechos humanos, especialmente en la búsqueda de un equilibrio entre los derechos y los intereses contrapuestos⁹², y para aplicar los convenios fundamentales de la OIT.

⁸⁵ Véase www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

⁸⁶ Véanse www.ilo.org/global/topics/social-security/WCMS_378991/lang--en/index.htm y <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020872815604814>.

⁸⁷ Véase www.worldbank.org/en/news/feature/2016/04/07/world-bank-group-sets-new-course-to-help-countries-meet-urgent-climate-challenges.

⁸⁸ Véase www.brettonwoodsproject.org/2016/09/world-bank-approves-new-diluted-safeguards/.

⁸⁹ Véase www.equator-principles.com/index.php/about-ep.

⁹⁰ Véase www.oxfamamerica.org/press/aid-group-lauds-new-world-bank-policies-on-indigenous-rights-and-oil-and-mining-transparency/.

⁹¹ Véase <https://medium.com/@OxfamIFIs/four-quick-ways-to-fix-the-world-banks-social-and-environmental-protection-policies-9e63721fe414>.

⁹² Véase www.hrw.org/news/2017/04/25/human-rights-watch-submission-re-international-financial-institutions-and-human.

66. Amnistía Internacional, que contribuyó a la elaboración del Marco Ambiental y Social mediante varias aportaciones, señaló: “[E]l rechazo del Banco a asumir su propia responsabilidad de respetar los derechos humanos [...] lo está llevando a quedarse a la zaga de otras instituciones financieras internacionales y puede entrañar grandes riesgos para su reputación”⁹³. Amnistía instó al Banco a “garantizar que el Marco Ambiental y Social prev[er] la diligencia debida en materia de derechos humanos con vistas a detectar, prevenir y/o mitigar todas las posibles repercusiones negativas para los derechos humanos”⁹⁴.

67. Asimismo, el NGO Forum on the Asian Development Bank y Social Justice Connection avisaron de que los logros habían sido “anulados en gran medida al reemplazarse unos requisitos claros sujetos a plazos por formulaciones imprecisas, vacíos en las normas, principios flexibles y la dependencia del ‘sistema del prestatario’”⁹⁵. La Confederación Sindical Internacional manifestó preocupaciones adicionales por la ausencia total de referencias a los convenios fundamentales de la OIT, que prohíben la discriminación, el trabajo infantil y el trabajo forzoso, y exigen el respeto de la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva. El Director de la Oficina de Washington de la Confederación observó que “el Banco debería estar obligado a garantizar la plena consonancia con los preceptos de los órganos normativos internacionales reconocidos, incluida la OIT en lo relativo al trabajo”⁹⁶.

68. El Experto Independiente considera que en el Marco Ambiental y Social debería haberse requerido explícitamente que todas las decisiones sobre financiación de proyectos fueran precedidas de una evaluación *ex ante* de las repercusiones del proyecto en cuestión para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente, y que se crearan mecanismos de examen para seguir vigilando las repercusiones a lo largo de la ejecución del proyecto.

B. Panel de Inspección

69. En 1993, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial creó el Panel de Inspección⁹⁷, un mecanismo independiente para la recepción de denuncias de quienes consideren que se han visto o pueden verse perjudicados por un proyecto financiado por el Banco. Durante los últimos 24 años, el Panel ha adoptado medidas para asegurar y mejorar la rendición de cuentas del Banco y ayudar a la administración a ejecutar proyectos transformadores. El Panel está integrado por tres miembros que son responsables directamente ante el Directorio Ejecutivo y son independientes de la administración del Banco, y su misión es garantizar que el Banco rinda cuentas sobre sus obligaciones ambientales y de derechos humanos. Todos los informes elaborados por el Panel, incluida la queja inicial, se hacen públicos, pero la identidad de los solicitantes se mantiene confidencial si así lo desean.

70. El ámbito de competencia del Panel de Inspección comprende los proyectos financiados por el BIRF y la AIF. Las quejas sobre proyectos financiados por la CFI y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones son tramitadas por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman⁹⁸.

71. Al estar facultado para llevar a cabo investigaciones, el Panel de Inspección encierra un potencial cada vez más claro para reparar injusticias relacionadas con los préstamos del

⁹³ Véase <https://consultations.worldbank.org/content/submission-amnesty-international>. Véanse también las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco Africano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, que integran en distinta medida el compromiso normativo de respetar los derechos humanos en todas sus actividades.

⁹⁴ Véase <https://consultations.worldbank.org/content/submission-amnesty-international>.

⁹⁵ *Bretton Woods Observer*, otoño de 2016, pág. 8. Puede consultarse en www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

⁹⁶ *Ibid.*, pág. 8. Véanse también www.ciel.org/news/safeguard-policy-endangers-rights/ y www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ess2-wb_ituc-critique_0914.pdf.

⁹⁷ Véanse www.inspectionpanel.org y el Informe Anual de 2015-2016 del Panel, que se puede consultar en <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Annual-Reports-2016.aspx>.

⁹⁸ Véase www.cao-ombudsman.org.

Banco. Sus procesos de solución de controversias permiten abordar preocupaciones fundamentales de las comunidades afectadas mediante la negociación y brindan la oportunidad de reparar los abusos cometidos. En este contexto, el Panel ha investigado presuntos daños al medio ambiente o a los medios de subsistencia de las personas provocados por proyectos de infraestructura. También ha examinado proyectos que afectan a los derechos de los pueblos indígenas, en particular sus derechos sobre la tierra y los lugares sagrados, así como proyectos que alteran los hábitats naturales, generan presión sobre los recursos hídricos, entrañan efectos negativos para los humedales o contribuyen a la deforestación o a la pérdida de biodiversidad, y proyectos que conllevan el traslado forzoso de la población, debido, por ejemplo, a la construcción de presas, carreteras, oleoductos, gaseoductos, vertederos o centrales eléctricas. Sin embargo, la competencia del Panel no abarca las cuestiones relativas a la adquisición de bienes o servicios, ni las sospechas de fraude o corrupción, que pueden denunciarse a la Vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial⁹⁹.

72. En 2013, 20 años después de la creación del Panel de Inspección, este presentó su Mecanismo Piloto de Soluciones Tempranas, un procedimiento de aplazamiento mediante el que ofrece una segunda oportunidad suspendiendo temporalmente la investigación para que la administración del Banco Mundial pueda resolver las quejas de la comunidad. Mientras que la segunda ronda de aplicación del Mecanismo Piloto en el Paraguay parece haber funcionado bien, en otros países se ha demostrado que la eliminación de una queja del proceso transparente del Panel puede perpetuar el desequilibrio de poder, ya que las comunidades han de negociar directamente con el personal del Banco y los cargos del gobierno que originaron los problemas¹⁰⁰. Así pues, el Mecanismo Piloto debería reformarse o suprimirse.

73. En respuesta al informe de Human Rights Watch sobre las represalias, varios mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales están elaborando directrices para prevenir, vigilar y combatir las represalias. Por ejemplo, el 30 de marzo de 2016, el Panel de Inspección publicó directrices para reducir los riesgos y combatir las represalias en el contexto de las actuaciones del Panel¹⁰¹. El Panel también colabora con otros mecanismos de denuncia, como el del Banco Europeo de Inversiones, con el que efectuó una investigación conjunta en Kenya en 2015, siguiendo un proceso de mediación. Según señala en su Informe Anual de 2015-2016¹⁰², el Panel llevó a cabo investigaciones en casos relativos a Kenya y Uganda, por una parte, y a Kosovo¹⁰³, por otra, y está participando en la resolución de casos en Armenia, Colombia, Mongolia y Uganda.

74. Además de publicar directrices, en 2016 el Panel de Inspección inició su Serie sobre Lecciones Emergentes, en el marco de la cual se reconocen errores y se proponen soluciones¹⁰⁴. La primera publicación de la serie (abril de 2016) trata sobre el reasentamiento involuntario¹⁰⁵; la segunda, sobre los pueblos indígenas (octubre 2016)¹⁰⁶; y la tercera, sobre la evaluación del impacto ambiental (abril de 2017). Estas publicaciones constituyen importantes instrumentos para el Banco, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

75. En opinión del Experto Independiente, que fue Jefe de la Sección de Peticiones del ACNUDH, el Panel de Inspección abre perspectivas muy alentadoras para los solicitantes, y debería garantizar una vigilancia continua de los proyectos del Banco Mundial. El inconveniente del procedimiento es que el Panel no tiene autoridad para exigir que se sigan sus recomendaciones. No obstante, se trata de un desafío al que también se enfrentan

⁹⁹ Véase www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/report-an-allegation.

¹⁰⁰ *Bretton Woods Observer*, otoño de 2016, pág. 5. Puede consultarse en www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

¹⁰¹ Véase <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelMandateDocuments/2016%20Retaliation%20Guidelines.pdf>.

¹⁰² Véase <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Annual-Reports-2016.aspx>.

¹⁰³ Todas las referencias a Kosovo del presente documento deben interpretarse de conformidad con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.

¹⁰⁴ Véase <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Emerging-Lessons.aspx>.

¹⁰⁵ Véase www.youtube.com/watch?v=D4Ewnz4JcVE.

¹⁰⁶ Véase www.youtube.com/watch?v=-0cuHodwjEA.

órganos de tratados de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que cuentan con sus respectivos procedimientos de denuncia¹⁰⁷.

C. Adopción de medidas preventivas y correctivas

76. Aunque es necesario realizar evaluaciones *ex ante* de las repercusiones de los proyectos, también deberían reforzarse el sistema de vigilancia de los proyectos en curso y el mecanismo para suspender la financiación cuando surjan problemas sanitarios, ambientales o de derechos humanos. Por ejemplo, en 2016 el Banco tuvo conocimiento de un caso de abusos sexuales generalizados por parte de los trabajadores de un proyecto de construcción de carreteras en Uganda que estaba financiando con 250 millones de dólares. Tras varios intentos fallidos de remediar la situación, se puso fin al financiamiento. Sin embargo, la cancelación *a posteriori* no basta. El Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, señaló lo siguiente:

Los múltiples fallos que hemos visto en este proyecto —por parte del Banco Mundial, del Gobierno de Uganda y de un contratista del Gobierno— son inaceptables. [...] Es nuestra obligación supervisar adecuadamente todos los proyectos en que invertimos para asegurar la protección de los pobres y vulnerables en el marco de nuestra labor. [...] Me comprometo a garantizar que hagamos cuanto esté en nuestra mano [...] para, en primer lugar, analizar exhaustivamente las circunstancias que rodean a este proyecto y, a continuación, aprender rápidamente de los fallos propios y los ajenos a fin de que no se repitan¹⁰⁸.

77. A raíz de un informe del Panel de Inspección, el Banco adoptó nuevas medidas y, en 2017, la administración del Banco publicó una respuesta en la que formulaba propuestas concretas para la reparación y señalaba las lecciones aprendidas. En esa respuesta se afirmaba lo siguiente:

[L]a administración ha adoptado medidas en dos frentes —a nivel del proyecto y en el conjunto del sistema— para encarar estas cuestiones. A nivel del proyecto se han adoptado medidas para brindar apoyo a las víctimas de maltrato infantil y para completar el proceso de indemnización, resolver asuntos relativos a la construcción y contribuir al fomento de la capacidad del organismo de ejecución; y se ha prestado ayuda para responder a la violencia de género¹⁰⁹.

78. En 2014, el Banco tuvo que replantearse un proyecto en favor de la industria algodonera de Uzbekistán cuando supo que era común la práctica del trabajo forzoso, tanto de adultos como de niños. Según observó una investigadora superior de Human Rights Watch especializada en las instituciones financieras internacionales, “las propuestas del Banco Mundial resultan insuficientes en Uzbekistán, un caso inusual en el que la práctica del trabajo forzoso en el sector del algodón está orquestada por el Gobierno y es apoyada por grupos de represión independientes. [...] El Banco Mundial debe garantizar que los grupos y periodistas independientes puedan vigilar los proyectos del Banco Mundial y denunciar los casos de trabajo forzoso sin temor a sufrir represalias”¹¹⁰.

D. Asesor en Cumplimiento/Ombudsman

79. Como ya se ha señalado, la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman, creada en 1991, es el mecanismo independiente para la rendición de cuentas de la CFI y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). La Oficina del Asesor en

¹⁰⁷ Jakob Th. Möller y Alfred de Zayas, *United Nations Human Rights Committee Case Law 1977-2008: A Handbook*, Kehl/Strasbourg, N. P. Engel Verlag, 2009.

¹⁰⁸ Véase www.theguardian.com/global-development/2016/jan/12/world-bank-cancels-uganda-road-sexual-assault-claims.

¹⁰⁹ <http://documents.worldbank.org/curated/en/256791492009515078/pdf/Uganda-TSDP-1st-Progress-Report-REV-for-SVPOP-April-4-final-fdg-CLEARED-04062017.pdf>, pág. IV.

¹¹⁰ Véase www.hrw.org/news/2014/12/17/world-bank-investigate-uzbekistans-forced-labor.

Cumplimiento/Ombudsman tiene el mandato de “ejercer las funciones de mecanismo independiente de rendición de cuentas imparcial, fiable y eficaz y mejorar las prácticas ambientales y sociales de la CFI y el OMGI”. La Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman elige sus investigaciones de forma independiente y está directamente subordinada al Presidente del Grupo del Banco Mundial.

80. En sus investigaciones más recientes, la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman ha formulado recomendaciones pertinentes sobre la falta de vigilancia por parte de la CFI de las repercusiones ambientales y sociales del proyecto de Amalgamated Plantations Private Limited en la India. A este respecto, concluyó lo siguiente:

La Oficina ha detectado una serie de infracciones [...] en la evaluación del impacto ambiental y social previa a la inversión de la CFI, así como en la supervisión del proyecto por la CFI. [...] [L]a CFI subestimó los problemas ambientales y sociales asociados al proyecto. Para gestionar esos problemas de conformidad con los requisitos de la CFI se requerirá un nivel de recursos y competencias especializadas pertinentes superior al que la CFI ha puesto a disposición del cliente hasta la fecha. [...] En vista de las infracciones constatadas [...], la Oficina mantendrá abierta esta investigación [...] hasta que las medidas adoptadas por la CFI garanticen a la Oficina que la CFI está remediando las infracciones constatadas¹¹¹.

En otro caso, la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman auditó una inversión de la CFI en una central eléctrica de carbón cerca de la ciudad portuaria de Mundra, en Gujarat (India), tras recibir una queja de un grupo de pescadores residentes en las proximidades del emplazamiento que se veían afectados por las repercusiones ambientales de las actividades de la central. Los auditores llegaron a la siguiente conclusión:

La evaluación del impacto ambiental y social llevada a cabo por la CFI [...] no contribuyó a la formación de una opinión fiable sobre si cabía esperar que el proyecto se ajustara a los requisitos de las Normas de Desempeño en un plazo razonable [...]. Las deficiencias del proceso de evaluación del impacto ambiental y social por la CFI también entrañaron la pérdida de oportunidades para estudiar, según lo exigido, concepciones alternativas del proyecto para evitar o minimizar las repercusiones ambientales y sociales. [...] [L]a Oficina considera preocupante que todavía no se haya establecido un marco para la gestión de las repercusiones ambientales y sociales que pueda ser objeto de auditoría y vigilancia; el elemento que falta es un compendio de los requisitos en función de los cuales se medirá el desempeño, utilizando datos verificables. [...] La confianza del equipo de la CFI en la capacidad y el compromiso del cliente en lo relativo a los aspectos ambientales y sociales, junto con la percepción de que el desempeño ambiental y social del proyecto está resultando adecuado, han llevado a que la CFI no haya tratado las preocupaciones formuladas en la queja como posibles infracciones. Con arreglo a las Directrices Operacionales de la Oficina, esta auditoría se mantendrá abierta y sometida a la supervisión de la Oficina hasta que esta se haya cerciorado de que la CFI vuelve a respetar sus compromisos en materia ambiental y social¹¹².

81. En el anexo VII del presente informe se resumen otras auditorías destacables. Cabe señalar, no obstante, que, como en el caso del Panel de Inspección, el Ombudsman no tiene autoridad para reparar los abusos cometidos. Como ha observado Human Rights Watch, la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman investiga, pero “es la CFI la que determina el modo de atender a las conclusiones del investigador y a menudo decide no hacerlo”¹¹³.

¹¹¹ www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOInvestigationReportofIFCinvestmentinAPPL_EN.PDF, pág. 11.

¹¹² Véase www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOAuditReportC-I-R6-Y12-F160.pdf, pág. 5.

¹¹³ Véase www.hrw.org/news/2017/02/21/world-banks-view-through-looking-glass.

V. Reflexiones para el futuro

82. El Experto Independiente acoge con satisfacción las numerosas medidas positivas ya adoptadas por el Banco Mundial para hacer frente a los problemas sistémicos y extrínsecos y alienta a la Junta de Gobernadores a que refuerce la gobernanza y la rendición de cuentas del Banco Mundial mejorando y facilitando el acceso a la justicia cuando se cometan abusos. El Banco está en condiciones de cumplir su compromiso de poner fin a la pobreza y contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030. La coyuntura invita al optimismo: el Banco es consciente de los problemas, dispone de un personal extraordinario y cuenta con las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil, que no dejan de difundir excelentes estudios, diagnósticos y recomendaciones pragmáticas.

83. Puesto que los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Banco Mundial, reciben grandes inyecciones de fondos públicos, el enfoque sesgado en favor del sector privado que adoptan tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo debe ser transformado en un enfoque basado en los derechos humanos en el marco del cual se ponderen atentamente las necesidades de las poblaciones implicadas.

84. El Experto Independiente considera que es necesario un replanteamiento fundamental, que debería conducir a definir explícitamente nuevas prioridades que antepongan a los intereses de los inversores extranjeros los de los miles de millones de seres humanos que se ven privados de los medios para satisfacer sus necesidades vitales. Deben modificarse las reglas del juego para que no se concedan préstamos sobre la base de consideraciones exclusivamente económicas y para que, en adelante, las “condicionalidades” del préstamo tengan por objeto promover el bienestar de las poblaciones implicadas. El Experto Independiente admira la impresionante retórica y las atractivas publicaciones del Banco Mundial, pero sugiere que se dediquen menos recursos a las relaciones públicas y el embalaje del producto y muchos más a las labores de evaluación de riesgos, vigilancia y ejecución.

85. En este sentido, el Experto Independiente propone un cambio de paradigma, que requerirá no solo una reforma del Convenio Constitutivo de 1944, aprobado en Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos) y modificado por última vez el 16 de febrero de 1989, sino también la definición de directrices claras por la Junta de Gobernadores. Con arreglo al artículo V, sección 8 a), del Convenio Constitutivo, el Banco debería cooperar con organizaciones internacionales que tengan responsabilidades especializadas de índole semejante, como el Consejo Económico y Social y la UNCTAD, que han propuesto planes de acción para promover el desarrollo y los derechos humanos¹¹⁴.

86. En la actualidad, el artículo IV, sección 10, del Convenio Constitutivo podría interpretarse como un obstáculo para ese cambio de paradigma. En esa disposición obsoleta se establece que “el Banco y sus funcionarios no podrán intervenir en asuntos políticos de ningún miembro ni tampoco permitirán que la clase de gobierno de un miembro o de miembros interesados sea factor que influya en sus decisiones”. Sin embargo, no hay razón para considerar que la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente entren en el ámbito de las “actividades políticas” prohibidas del Banco. De hecho, todos los Estados partes en el Convenio del Banco Mundial también son miembros de las Naciones Unidas, y están obligados por la Carta de las Naciones Unidas y por numerosos tratados de derechos humanos.

87. Cabe destacar el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que entró en vigor el 15 de noviembre de 1947, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 15 de abril de 1948, que entró en vigor el 1 de julio de 1948. Con arreglo al artículo IV del Acuerdo, las Naciones Unidas y el Banco se consultarán mutuamente y cambiarán opiniones sobre las cuestiones de interés común. Tras esas consultas podrán hacerse recomendaciones formales. Además, “el Banco reconoce que las Naciones Unidas y sus órganos pueden legítimamente hacer recomendaciones respecto a

¹¹⁴ Véase Banco Mundial, “Coherence, coordination and cooperation among multilateral organizations: 2009 progress report”, 2009. Puede consultarse en <http://documents.worldbank.org/curated/en/589571468339611391/pdf/484000BR0SecM2101Official0Use0Only1.pdf>.

los aspectos técnicos de los planes, programas o proyectos de reconstrucción y fomento”. En el artículo VIII se autoriza específicamente al Banco “a pedir dictámenes a la Corte Internacional de Justicia sobre las cuestiones jurídicas que surjan dentro del campo de actividades del Banco”. Por consiguiente, convendría hacer un mejor uso del Convenio Constitutivo a fin de coordinar eficazmente la labor de las Naciones Unidas y la del Banco de una manera que contribuya al cumplimiento de los compromisos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, desarrollo y medio ambiente. En particular, el Banco debería solicitar una opinión consultiva sobre la prevalencia general de los tratados de derechos humanos frente a los acuerdos comerciales y de otro tipo y sobre la mejor forma de integrar las normas consuetudinarias de derechos humanos en las condicionalidades de los préstamos del Banco.

88. Dado que el Convenio Constitutivo del Banco y el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco son anteriores a la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y muchos otros tratados de derechos humanos, parece razonable esperar que las políticas del Banco promuevan, y no dificulten, el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que incumben a sus Estados miembros. En el artículo XIII del Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco se establece que el Acuerdo estará sujeto a revisión y que ambas partes están autorizadas a concluir arreglos complementarios, lo cual abre la puerta para que el Banco se adhiera a ciertos principios fundamentales de las Naciones Unidas, como el respeto de la soberanía de todos los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. La adherencia a esos principios exige la aceptación del hecho de que los Estados, en particular los países en desarrollo, necesitan un margen de flexibilidad y espacio normativo para aplicar políticas sociales destinadas a garantizar la seguridad alimentaria, elevar el nivel de vida, reforzar las leyes laborales y asegurar el acceso al agua y la educación, objetivos que, según ha trascendido, se han visto comprometidos por algunos proyectos de privatización financiados por el Banco. Toda modificación del acuerdo de asociación debería fortalecer la cooperación entre el Banco y las Naciones Unidas, en particular la colaboración con la UNCTAD.

89. Además de modificar su Convenio Constitutivo, el Banco Mundial debe asumir la plena responsabilidad de las consecuencias de sus inversiones y aplicar medidas preventivas y correctivas para garantizar la participación efectiva de todos los interesados y la protección de los defensores de los derechos humanos sobre el terreno. Desde el punto de vista formal, uno de los problemas que hay que resolver es el de la falta de democracia de la estructura decisoria del Banco Mundial, que da lugar a un establecimiento de prioridades no equitativo y, en ocasiones, contraproducente. Por consiguiente, debería suprimirse gradualmente el acuerdo entre caballeros según el cual la dirección del Banco será ocupada por ciudadanos de determinados Estados. Además, como han señalado otros relatores, deben reforzarse las voces de los países en desarrollo, insuficientemente representados.

90. El Experto Independiente suscribe la observación formulada en 2006 por el Director de Programas Mundiales del Instituto del Banco Mundial de que “sería como cubrirse con una ‘hoja de parra’ virtual si cualquier institución afirmara que está contribuyendo en gran medida a promover los derechos humanos en un país simplemente por estar financiando proyectos de desarrollo, por ejemplo de abastecimiento de agua o de construcción de carreteras en las zonas rurales”¹¹⁵. Si al Banco de verdad le importa el desarrollo, deberá cambiar las condicionalidades para no favorecer la privatización, la desregulación y la reducción de la tributación empresarial, y centrarse en la disminución de los gastos militares, velando por que se promulgue y aplique una legislación fiscal progresista, se proscriban los paraísos fiscales y se establezca un impuesto sobre las transacciones financieras cuya recaudación sirva para financiar la construcción de “un mundo sin pobreza” mediante la solidaridad internacional.

¹¹⁵ Daniel Kaufmann, “Human rights, governance, and development: an empirical perspective”, en *Development Outreach*, Instituto del Banco Mundial, octubre de 2006, pág. 19. Puede consultarse en <http://siteresources.worldbank.org/EXTSITETOOLS/Resources/KaufmannDevtOutreach.pdf>.

VI. Conclusiones y recomendaciones

91. El Banco Mundial debería:

a) Empezar un proceso inclusivo para la formulación de una nueva política específica de derechos humanos que refleje la voluntad del Banco de integrar los derechos humanos en su labor analizando las cuestiones de derechos humanos pertinentes para el desarrollo en el contexto de las estrategias nacionales, asesorar a los gobiernos sobre el modo de avanzar en el cumplimiento de sus compromisos de derechos humanos y detectar los riesgos que puedan entrañar para los derechos humanos sus inversiones o recomendaciones.

b) Adoptar y aplicar la Misión Común en pro de una Protección Social Universal y la Recomendación de la OIT sobre los Pisos de Protección Social, 2012 (núm. 202)¹¹⁶. El Banco debería promover la aprobación de disposiciones obligatorias sobre el trabajo basadas en las normas de la OIT, así como la derogación de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados que socavan el derecho de los gobiernos a regular (véanse A/HRC/30/44 y A/HRC/33/40).

c) Dejar de promover la desregulación del mercado laboral, en particular mediante sus condicionalidades de financiamiento, y en lugar de ello ayudar a revertir el aumento de la desigualdad de ingresos fomentando el diálogo social y la negociación colectiva.

d) Formular políticas fiscales y emplear instrumentos de diligencia debida que no se limiten a una simple petición de observancia de la ley por parte de las empresas a las que presta dinero.

e) Exigir a la CFI que elabore y aplique una política de inversión responsable desde el punto de vista fiscal, que debería formularse consultando a la sociedad civil y prever, como mínimo, un nivel de diligencia debida más allá del mero cumplimiento de la ley para garantizar que la CFI no pueda invertir en empresas que recurran a prácticas fiscales agresivas o abusivas.

f) Apoyar iniciativas destinadas a renovar el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación elevando su categoría a la de órgano intergubernamental encargado de prevenir la competencia fiscal internacional perniciosa, los efectos negativos indirectos de los cambios de las políticas tributarias y las corrientes financieras ilícitas.

g) Informar a las comunidades que se vean o puedan verse afectadas por los proyectos de la existencia del Panel de Inspección y el Asesor en Cumplimiento/Ombudsman, así como de las vías para ponerse en contacto con esos órganos.

h) Incorporar capítulos sobre los derechos humanos en los acuerdos suscritos con los países prestatarios, brindar a los Estados asesoramiento orientado a las políticas sobre la mejor manera de promover la transparencia y la responsabilidad fiscal en todos los sectores, incluido el del gasto militar estatal.

i) Abordar, con carácter de urgencia, la cuestión de las represalias que sufren quienes critican los proyectos del Banco Mundial. Los mecanismos de rendición de cuentas deberían analizar sistemáticamente el riesgo de represalias y otros riesgos de seguridad asociados a cada denuncia recibida y examinar esos riesgos con los denunciantes; adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los denunciantes que soliciten que no se revele su identidad; hacer un seguimiento activo de cada caso para averiguar si se toman represalias, por ejemplo preguntando a los denunciantes si ellos mismos o personas estrechamente vinculadas a ellos han tenido algún problema, en particular tras las visitas a las comunidades; crear un sistema de alerta temprana para detectar amenazas u otros problemas de seguridad a los que puedan enfrentarse, especialmente, quienes hayan

¹¹⁶ Véase www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202.

presentado una denuncia o estén considerando la posibilidad de hacerlo o quienes critiquen de algún otro modo los proyectos; y trabajar con la administración del Banco Mundial para responder a cualesquiera represalias vinculadas a los casos que se les planteen con vistas a proteger a los denunciantes y otras personas.

j) Establecer procedimientos operacionales con arreglo a los cuales la administración del Banco deba elaborar y publicar informes semestrales de seguimiento de los avances en la ejecución de los planes de acción de la administración aprobados por la Junta en respuesta a las investigaciones del Panel de Inspección.

k) Crear mecanismos para garantizar que los informes y las recomendaciones del Panel de Inspección y el Asesor en Cumplimiento/Ombudsman se divulguen y se pongan en práctica. Capacitar al Panel de Inspección y al Asesor en Cumplimiento/Ombudsman para que se refieran a los derechos humanos en sus informes y recomendaciones, en particular citando expresamente las recomendaciones de los órganos de tratados de derechos humanos y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales.

l) Mantenerse alerta ante cualquier noticia de malversación de fondos y garantizar que las violaciones de los derechos humanos que se cometan en relación con la concesión o la utilización de préstamos se remitan a los tribunales civiles y penales adecuados y que los casos de corrupción no queden impunes y sean enjuiciados en los tribunales nacionales.

m) Asesorar a los gobiernos en lo relativo a su responsabilidad de regular las prácticas empresariales para que las empresas no cometan violaciones de los derechos humanos y paguen los correspondientes impuestos en las jurisdicciones en que se ejecuten los proyectos.

n) Intensificar su cooperación con el ACNUDH, la UNCTAD, la OIT y la OMS.

o) Revocar la inmunidad institucional cuando se hayan cometido violaciones manifiestas de los derechos humanos.

92. La CFI debería desvincularse inmediatamente de todas las empresas y proyectos que eludan impuestos, y dejar de conceder fondos a prestatarios que operen directa o indirectamente en paraísos fiscales y, por consiguiente, priven a los países de sus ingresos fiscales legítimos, que resultan cruciales para el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.

93. La Junta de Gobernadores del Banco Mundial debería establecer claramente en una directriz que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones debe evitar toda injerencia en las funciones ontológicas del Estado, a saber, legislar en pro del interés público, en particular promulgando legislación ambiental, sanitaria, social y laboral. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones no debería prestar sus servicios para litigios que entrañen un cuestionamiento de esas funciones del Estado, sino que debería actuar con arreglo a su vocación de prestar servicios en calidad de asesor¹¹⁷. Ante la existencia de riesgos, los inversores deberían recurrir al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco para adquirir seguros (véanse A/HRC/30/44, A/HRC/33/40 y A/70/285).

94. Los países que se benefician de la financiación del Banco Mundial deberían velar por que todos los préstamos que se les concedan y todas las inversiones extranjeras directas que reciban se utilicen de una manera que promueva el disfrute

¹¹⁷ Véase Kinda Mohamadieh, Lean Ka-Min y Anna Bernando, *Investment Treaties: Views and Experiences from Developing Countries*, Ginebra, South Centre, 2015. Véanse también www.iisd.org/itn/2008/08/06/south-american-alternative-to-icsid-in-the-works-as-governments-create-an-energy-treaty/, <http://old.brettonwoodsproject.org/art-561061>, <http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2012/01/19/venezuela-follows-bolivia-and-ecuador-with-plans-to-denounce-icsid-convention/>, y Rafael Ramírez, *Nuestra Industria Petrolera es un Baluarte de Soberanía*, Caracas, Petroleros de Venezuela, 2014.

de los derechos humanos y no dé lugar al enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría. En particular, deben existir mecanismos de vigilancia para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, el seguimiento regular de la actividad empresarial y la disponibilidad de vías de recurso y medidas de reparación para quienes resulten perjudicados por proyectos financiados por el Banco Mundial y préstamos y “rescates” públicos financiados por el FMI.

95. Los países donantes deberían:

a) Exigir que su dinero se utilice solo de maneras que promuevan el bien común;

b) Denegar el financiamiento mientras no exista, o hasta que no se establezca, un procedimiento efectivo para ofrecer vías de recurso y medidas de reparación a las víctimas en caso de que se cometan vulneraciones;

c) Retirar la financiación a proyectos en curso cuando sea evidente que se están cometiendo violaciones de los derechos humanos, y no restablecer el apoyo presupuestario directo hasta que se constate una mejora considerable en lo relativo a los derechos humanos;

d) Asumir su responsabilidad promoviendo investigaciones independientes, sin participación de los gobiernos sospechosos de corrupción u otras vulneraciones.

96. Los medios de comunicación deberían informar objetivamente sobre los abusos que se cometan en relación con los acuerdos de préstamo, en particular en casos de desalojos, destrucción del medio ambiente, trabajo infantil y corrupción.

97. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación debería centrarse en la alerta temprana para contribuir a evitar los abusos asociados a los proyectos financiados por el Banco Mundial, y sacar a la luz los casos de corrupción, blanqueo de dinero y conexión con paraísos fiscales.

98. Las organizaciones de la sociedad civil deberían alertar a la población sobre los peligros que entrañan los megaproyectos y ayudar a las comunidades afectadas a presentar quejas al Panel de Inspección del Banco Mundial¹¹⁸ y la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman¹¹⁹.

¹¹⁸ Véase <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/FileaRequest.aspx>.

¹¹⁹ Véanse www.cao-ombudsman.org/howwework/filecomplaint/ y <https://www.cao-grm.org/>.

Anexo I

[Inglés únicamente]

Questionnaire from the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order to the World Bank

1. How does the World Bank promote the right to food, water, health and a safe and clean environment? How does the Bank consider the relationship between its general development model and human rights? In particular, how does the Bank consider mega infrastructure projects and significant private sector investment to impact human rights?
2. How does the Bank's new Environmental and Social Framework contribute to promoting and protecting human rights?
3. Concerning the organisation's institutional governance, how does the Bank ensure transparency in decision-making? What type of accountability exists to remedy any adverse effects on human rights resulting from projects or policies funded or promoted by the Bank? What recourse or remedy is provided for victims of alleged human rights violations? Is there any policy in place to prevent your financial assistance from being used to finance international crimes or to commit human rights violations?
4. How often are human rights, health and environment impact assessments conducted? Are ex ante impact assessments conducted ahead of loan agreements or development projects? Are ex post monitoring carried out?
5. How do you ensure the Bank projects do not involve a regression in the enjoyment of human rights? To what extent, and how, the Bank consider reducing economic inequality as part of their lending policies?
6. How do you ensure the participation and consultation with all stakeholders, including affected communities, in relation to decisions concerning new loan or development projects? What are the measures put in place by the Bank to work hand-in-hand with concerned governments to protect those voicing dissenting views? Is there any policy in place in case of opposition by affected communities or civil society organisations or others? Give examples of projects that have not been undertaken or have been abandoned when they have caused or are likely to cause irreparable harm, e.g. mass displacement of population.
7. How does the Bank see its responsibilities under international law and international human rights law? More concretely, how does the Bank intend to advance the realization of the Sustainable Development Goals and the COP21 commitments? To what extent does the Bank implement the recommendations of the ILO's World Social Protection Report? To what extent does the Bank act pursuant to General Assembly Resolution 69/319, Basic Principles on Sovereign Debt Restructuring Processes? Bearing in mind that "austerity measures" and "privatization" may cause considerable harm to the most vulnerable groups, what other measures does the Bank envisage so that human rights are not hindered but promoted? What do you do to alleviate the debt problem?
8. In the World Bank's responses to previous Special Procedure Mandate Holder reports, the Bank's spokesperson said that the 2015 report of the UN Special Rapporteur on human rights and extreme poverty (A/70/274) had fundamentally misrepresented the Bank's position on human rights. Could you provide a more detailed response to the report (which parts do you agree and disagree with and why)? Has there been any internal follow-up on the publication of the report?
9. How does the Bank respond to the August 2016 report of the UN Independent Expert on Human Rights and foreign debt (A/71/305), in which he calls for the Bank to significantly broaden its definition of 'sustainability' under its Debt Sustainability

Framework and take into consideration the need to provide fiscal space to guarantee and ensure governments' core human rights obligations?

10. How do you measure public-private partnership performance in human rights terms? What relationship exists between the Bank and governments that harbour tax havens and enterprises that use secrecy jurisdictions to avoid taxes?

11. How can the Bank collaborate with UNCTAD in implementing meaningful debt relief for poor countries and devising an international debt restructuring mechanism to resolve debt crises? How does the Bank ensure the social and environmental sustainability of their projects in cases of co-lending with other international financial institutions, including new international financial institutions such as the BRICS new development bank (NDB) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), or in cases of financial intermediary lending?

12. How does the Bank envisage cooperation with the NDB and AIIB to strengthen the Purposes and Principles of the United Nations while advancing growth, stability and the right to development?

Anexo II

[Inglés únicamente]

Table of relevant reports

International Human Rights Mechanisms and the World Bank/IMF

Special Procedures

Special Rapporteur on extreme poverty and human rights

Report on the World Bank and human rights (A/70/274)	http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/274 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20797&LanguageID=E (Statement)
--	--

Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health

Missions to the World Bank and the International Monetary Fund in Washington, D.C. (20 October 2006) (A/HRC/7/11/Add.2)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/CountryVisits.aspx
---	---

Special Rapporteur on adequate housing

Preliminary note on the mission to the World Bank Group (26 October to 1 November 2010) (A/HRC/16/42/Add.4)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx
Report on the financialization of housing the right to adequate housing (A/HRC/34/51)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/AnnualReports.aspx http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20878&LanguageID=E (Statement)

Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation

Report on development cooperation and the realization of the human rights to water and sanitation (A/HRC/71/302)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/AnnualReports.aspx http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20878&LanguageID=E (Statement)
--	--

Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights

Report on Responsibility of international financial institutions (A/HRC/7/9)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/EDebt/Pages/AnnualReports.aspx
Guiding Principles on Foreign Debt and Human Rights (A/HRC/20/23), endorsed by the HRC (A/HRC/RES/20/10)	http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/23 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/20/10

Commentary on the guiding principles on foreign debt and human rights (A/HRC/25/51)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/AnnualReports.aspx
Report on structural adjustment and labour rights (A/HRC/34/57)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/AnnualReports.aspx
<i>Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises</i>	
Report on developments in the embedding of the Guiding Principles into global governance frameworks (A/67/285)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Reports.aspx
Report on improving policy coherence for inclusive and sustainable development (A/HRC/29/28)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Reports.aspx
Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association	
The exercise of the rights to freedom of peaceful assembly and of association in the context of multilateral institutions (A/69/365)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders	
Empowering environmental human rights defenders (A/71/281)	http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/71/281
Other Special Procedures actions	
SP Joint Letter from 12 December 2014	http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/WorldBank.pdf
Communication from the Special Rapporteur on the right to food and the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States to the World Bank	https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/public_-_AL_Other_(W.Bank)_10.08.12_(7.2012).pdf https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_OL_Other_28.03.13_(3.2013).pdf https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/OTH_09.10.12_(7.2012).pdf (reply from the Bank)
Communication from the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States and the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples to the World Bank	https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=22932 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=49127 (reply from the Bank)

Treaty Bodies

Committee on economic, cultural and social rights

General Comment No. 14 The right to the highest attainable standard of health

http://apps.who.int/disasters/rep/13849_files/o/UN_human_rights.htm

(Para. 39: States parties which are members of international financial institutions, notably the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should pay greater attention to the protection of the right to health in influencing the lending policies, credit agreements and international measures of these institutions.)

OHCHR

Comments and recommendations of UN/OHCHR in relation to the draft Environmental and Social Framework (2016)

https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/20160315_memorandum_ohchr_esf_with_annexes.pdf

Key messages on Human Rights and Financing for Development

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndFinancingForDevelopment.pdf>

Report on austerity measures and economic and social rights

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_en.pdf

Others

UN International Law Commission

Draft articles on the responsibility of international organizations, with commentaries, 2011 UN.Doc. A/66/10

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_11_2011.pdf

OAS

Public Hearing: Human rights violations and responsibility of international financial institutions

http://www.ciel.org/Publications/IFIs_HR_Analysis_28Feb07.pdf

Anexo III

[Inglés únicamente]

Tilburg-GLOTHRO Guiding Principles on the World Bank Group, the IMF and Human Rights

Underlying Notions and Observations

Human Rights Obligations for International Financial Institutions (IFIs)

1. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 is a ‘common standard of achievement for all peoples and all nations’ (Preamble of the Declaration). At the beginning of the new Millennium, the Declaration goes far beyond being merely a moral or political obligation, as large parts of it belong to international customary law, while some rights have developed into jus cogens standards.
2. As a follow-up to the 1948 Declaration, a large number of human rights conventions have been adopted by the United Nations, including its Specialised Agencies, and by regional organisations. Regional and international supervisory bodies and national courts have established a serious and extensive body of case law and jurisprudence.
3. International human rights law includes civil, cultural, economic, political and social rights, as well as the right to development. These rights are, each in their own way, relevant in the struggle against poverty as well as for other activities performed by World Bank and IMF, and, mutadis mutandis, other IFIs.
4. The traditional division between obligations of States not to interfere with civil and political rights on the one hand, and obligations of States to actively provide for the realisation of economic, social and cultural rights on the other hand, is no longer reflecting the reality in the implementation of human rights. Instead, the division of obligations of States into three levels: the obligation to respect, the obligation to protect and the obligation to fulfil, has gained widespread acceptance in the international human rights community.
5. The responsibility for implementing human rights is universal and concerns all — state and non-state — actors whose activities may affect people’s lives. The primary responsibilities and obligations in the field of domestic human rights enjoyment, however, remain with the State: States cannot ‘delegate’ human rights obligations to, for instance, international institutions and relieve themselves of these obligations. As international legal persons, the World Bank and the IMF have international legal obligations to take full responsibility for human rights respect in situations where the institutions’ own projects, policies or programmes negatively impact or undermine the enjoyment of human rights.
6. The two IFIs are also Specialised Agencies, having entered into Relationship Agreements with the United Nations in accordance with UN Charter Article 63. This is another indication of their international legal personality separate from their members, which carries with it rights and obligations according to international law. According to the Relationship Agreements the organisations are, and are required to function as, independent international organisations. It provides an organisational independence from the UN, not from international law.
7. The World Bank and the IMF are governed by their member States. When representatives of member States determine the policies of the two IFIs, they are bound by their States’ international obligations, including those arising from international human rights law. This includes an obligation on those States in a position to assist, to provide international assistance and co-operation. The obligation of international assistance and co-operation includes the duty to work actively towards an equitable financial investment and multilateral trading system that is conducive to the reduction and eradication of poverty and the full realisation of all human rights.

8. As members of the UN the member States of the two IFI's have legally committed themselves to uphold the purposes and principles of the UN Charter, including the promotion of respect for human rights. According to Article 103 of the UN Charter, the obligations of States under the Charter, including obligations in the field of human rights, take primacy over other international obligations.

Linking Legal Obligations in the Field of Human Rights to Economic and Political Realities

9. Markets are to ensure economic effectiveness in processes of production, distribution and consumption of goods and services. From a macro-economic perspective they may contribute to generally improved living conditions. To ensure, however, that outcomes of economic processes also conform to standards of social justice and meet obligations in regard to the daily livelihoods of poor people, human rights standards must be an integral part of decision-making by actors in market-oriented environments.

10. While most governments have ratified human rights conventions, the status of human rights in many societies — in all its dimensions — remains precarious at best. The implementation of rights is often impeded by weak legal systems, particularly relating to the poor, the powerless, minorities and indigenous peoples as well as to the realisation of the right to a clean environment. The negative experience with capacity building and institutional development is a major problem for any discussion on the mainstreaming of human rights in development institutions.

11. Practice often shows that one part of government does not necessarily know what another part is doing, even if both parts are working in the same field. One segment of the government might even be resistant to what another governmental agency is doing. Often, governments do not ensure that all relevant departments are familiar with international human rights norms that bear upon policy-making processes. This is a problem in all States in the world, albeit in varying degrees.

12. When the UN was created, it was endowed, through its Charter, with a mandate to deal with problems of international co-operation, in particular economic and social co-operation. Today, much of the economic policy dialogue has shifted to the World Bank and the IMF (and to the WTO, which is not addressed in these Guiding Principles).

13. The World Bank and the IMF currently also address global concerns that are within the expertise of different UN organs and Specialised Agencies, inter alia, security, environment, social policy, gender, development, poverty reduction, debt relief, health and educational issues. They exert significant influence on these issues either directly, by setting actual policies, or indirectly, by prescribing economic policy directives.

14. In practice, there is a striking asymmetry of power and influences between the UN and both IFIs. The World Bank and the IMF have considerable resources available to fulfil their mandates and they dispose of powerful means to have their decisions enforced. The UN on the other hand has only a limited budget, apart maybe from the UN Security Council, which is insufficient to effectively perform the wide spectrum of functions it is expected to fulfil.

15. There is a troubling lack of dialogue and co-ordination between the UN and the two IFIs. The World Bank and the IMF, albeit UN Specialised Agencies, exhibit a large degree of independence from the UN. Based on their interpretation of the Relationship Agreements with the UN, the IFIs have contrived to distance themselves from many UN resolutions and recommendations that reflect the broad wishes of the international community.

16. Although the World Bank and the IMF increasingly adopt partnerships with other organisations, including those within the UN system, these partnerships often mean that the IFIs set the policy directions while the respective partner organisation is tasked with the implementation. Partnership in the design of policy directions is rare.

Evaluation and Redress of Adverse Human Rights Impacts

17. Rights and obligations demand accountability, while it is up to the duty-holders to determine which accountability mechanisms are most appropriate in particular cases. In any case, however, these mechanisms must be accessible, transparent and effective.

18. A human rights impact assessment can be done *ex ante*, i.e. in the stage of decision-making, or *ex post*, i.e. when projects have evolved or have come to an end.

19. Strategies to supervise the implementation of economic, social and cultural rights should not be limited to the monitoring of violations. In relation to economic, social and cultural rights, the poor's access to these rights is one of the core issues. In particular, firm links need to be established between legal/constitutional reform and social policy. This includes the incorporation of international economic, social and cultural rights in national law, accompanied by a change in legal, political and social systems, structures and institutions.

20. The monitoring and assessment of human rights violations can normally be done on a case by case basis. However, in the framework of assessing the human rights impact of World Bank projects and IMF programmes, a case by case approach might work for individual projects and country strategies, but not for the evaluation of broad and general policies that are problematic from a human rights point of view.

21. The effectiveness of the World Bank Inspection Panel as a human rights accountability mechanism is limited by its inability to invoke specifically human rights law, its lack of decision-making power, the absence of a role for the petitioners in the Inspection Panel procedure itself, and the limited human rights expertise of the Panel.

22. The IMF Independent Evaluation Office's mandate allows flexibility in possible evaluation topics and consultations with informed and interested parties outside. The key lacuna in the Office's terms of reference, however, is that affected or interested parties cannot challenge IMF programs if flawed. For that reason, there is still a need to establish a complaint office.

*Guiding Principles**Human Rights Obligations for International Financial Institutions*

23. While joint statements by the World Bank and the IMF increasingly recognise that macroeconomic and financial aspects cannot be considered separate from the structural, social and human aspects of development, their macro-economic policy should take into account its impact on human development objectives, including human rights.

24. The World Bank and the IMF should integrate human rights considerations into all aspects of their operations and internal functioning. Both financial institutions should ensure that prevention of human rights violations is given high priority in their processes, policies, financed projects and in the implementation of various programs and strategies. If violations do occur in the course of these operations, then measures for mitigating the impact thereof and mechanisms of accountability and redress should be put into place.

25. The IMF Articles of Agreement acknowledge the need to respect domestic social and political policies of members. Such policies include international commitments to human rights. Neither the IMF nor the World Bank should impede the Borrower from honouring such legal obligations, or agree to measures depriving individuals of their rights under domestic and international law.

26. In concluding agreements with their members, the IFIs shall respect the obligations of the members according to Article 103 of the UN Charter, including giving priority to respect for human rights.

27. When determining the policies, programmes and projects of the World Bank and the IMF, member States must comply with their obligations under international human rights law, including the duty to engage in international assistance and co-operation. Moreover, when member States decide upon policies, programmes and projects that impact upon a State, they must take into account and respect the relevant national and international human

rights laws that apply to that State. Member States should not agree to measures that will impede their ability to comply with their national and international human rights obligations.

28. For reasons of operationalisation, general human rights obligations for the World Bank and the IMF should be specified in a practical and accessible instrument by which the two IFIs are to be guided in all their decisions and on the basis of which they can be held accountable.

29. The World Bank Articles of Agreement need to be interpreted in the light of the current definition of development, which includes respect for human rights.

30. The Bank's operational policies are an appropriate instrument for assisting staff in ensuring that Bank-financed projects do not result in human rights violations. The following clause should be included in the operational policies of the World Bank: 'The World Bank shall not finance projects that contravene applicable international human rights law.' A clause to the same effect should be included in loan agreements concluded between the Bank and member States. The loan agreements are international treaties, which are binding both on the international organisations and the State concerned, and are governed by international law. The Bank should ensure compliance with the human rights clause during implementation.

31. The following clause should be included in the policies of the IMF: 'The IMF shall not enter into financial agreements that contravene applicable international human rights law.' A clause to the same effect should be included in programme support agreements between the IMF and States. The IMF should ensure compliance with the human rights clause during implementation of its programmes.

Linking Legal Obligations in the Field of Human Rights to Political and Economic Realities

32. Concrete policies, programmes, projects and actions activate specific duties, including in particular with regard to people whose lives are affected by the decisions taken. In order to establish the nature and implications of such concrete duties, decision-making by the World Bank and the IMF should be open and transparent, so that the interests of all stakeholders be represented and acknowledged in the light of applicable international human rights standards.

33. The World Bank and the IMF are required to ensure that people who are affected by their projects and strategies as well as civil society organisations are given the opportunity to participate actively in taking the decisions that affect them. This participation should be facilitated and conducted in the light of applicable international human rights standards — including the principle of non-discrimination and the right to information, the right to be consulted, and the right to free and informed consent — and take into account marginalised groups and peoples, including indigenous peoples, with respect for their right to (internal) self-determination.

34. In adopting partnerships, the World Bank and the IMF need to pursue the equity of goals of other solid and financial partners and to take on board the goals and instruments of partner organisations, including those within the UN system, and to see how they relate to the Bank's and the IMF's policy orientations and decision-making processes. This would not only benefit all constituents of the World Bank and the IMF but also enrich the policy agenda of other actors. The World Bank and the IMF need to search systematically for common ground and co-operation so as to increase the impact of their projects and programmes on poverty reduction.

Evaluation and Redress of Human Rights Impacts

35. The World Bank and the IMF should ensure that all accountability mechanisms are easily accessible for affected individuals and groups, inter alia through supporting capacity building initiatives that would enable individuals and groups to engage more effectively with these institutions.

36. The World Bank and the IMF should support initiatives in which co-operation between human rights NGOs and development NGOs is strengthened in order to maximise their effective engagement with the IFIs and the communities affected by World Bank- and IMF-funded activities. It enables both IFIs to ensure the development of policies that are consistent with the rights and needs of these communities.

37. Given the wealth of information and data held by the World Bank and the IMF on issues closely bearing upon the implementation of human rights within States, both IFIs are urged to make this material available, on a regular basis, to relevant bodies within the UN human rights system, such as the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. The IFIs should also make their staff available to discuss such material with the relevant UN human rights organs.

38. The World Bank and the IMF should evaluate the human rights impact of their projects and policies, ex ante as well as ex post, through the collection of disaggregated data according to, inter alia, gender, race, religion, ethnicity, age and poverty level.

39. The insertion of a human rights clause in the World Bank operational policies will enable the World Bank Inspection Panel to include international human rights law in its review of the standards against which Bank actions are tested.

40. As a complement to the Inspection Panel procedure, the Bank should agree to engage in international arbitration for settling disputes with private parties. Affected parties might claim that the Bank with its operational policies has adversely affected their human rights.

41. Human rights considerations should be integrated in the IMF's Independent Evaluation Office's terms of reference, mandate and functioning. The Office, as well as the World Bank Inspection Panel, should build up human rights capacity and resources, including staff training.

42. The IMF should review its accountability mechanisms, in order to provide for settlement of complaints, brought by affected individuals and communities, challenging IMF programs and policies.

Anexo IV

[Inglés únicamente]

Global Unions “IFI Actions must contribute to building a fair and sustainable global economy” Statement by Global Unions to the 2017 Spring meetings of the IMF and World Bank

Washington, 21-23 April 2017

Introduction

1. A slight uptick in global growth prospects announced in the international financial institutions’ latest economic forecasts does not signal an improvement in the situation of working people. Global Unions¹ cite data showing wage stagnation and weak employment growth in much of the world, and urge the IFIs to focus on the creation of quality jobs, achieving the transition to a low-carbon future and reducing inequality. The trade union movement is concerned by the growth of right-wing nationalism in many countries, due in part to a lack of confidence in the global economic system. The IFIs should join those calling for fairer rules in international trade and investment agreements, not push for liberalization that further strengthens investors’ rights at the expense of everyone else.

2. Global Unions’ statement puts forward detailed recommendations for IFI action to make progress on gender equality and a just transition to a sustainable economy. The statement also recommends specific measures that the IMF and World Bank should take in order to contribute to reductions in income and wealth inequality. While welcoming the World Bank’s first-time adoption in 2016 of a labour standards lending requirement, Global Unions urge the Bank to fulfil commitments to cooperate with trade unions and the ILO for its implementation. Joint work with other development banks that have several years’ experience in applying labour safeguards is also suggested.

IFI forecasts do not announce improvements for working people

3. In updates to their global economic growth forecasts published at the beginning of the year, both the IMF and World Bank predict slightly higher growth for 2017 and 2018 due in large part to the impact on exporters of firmer prices for oil and some other commodities.

4. The IMF also factored in expectations of fiscal stimulus applied by the US, but both IFIs emphasized that the high degree of current policy uncertainty has increased “downside risks”. Signs of tighter credit conditions and reduced investment in emerging and developing economies, along with political instability and uncertainty in several countries, could further undermine the positive trends suggested in the latest IFI forecasts.

5. It should be noted that the IFIs’ growth predictions have been widely off the mark in recent years because of the failure to correctly assess the impacts of austerity policies, continued high unemployment and under-employment, and stagnant wages. At the beginning of 2016, the Fund and the Bank also predicted a growth uptick for that year. Instead, 2016 registered the slowest rate of global economic growth since the Great Recession year 2009.

6. Even if the slightly higher growth for 2017 predicted by the IFIs materializes, it will not significantly improve the situation of working people. Recent reports published by the International Labour Organization identify a steady deceleration of wage growth since 2012 in developing and emerging countries, and forecast a modest increase in the global

¹ The Global Unions group is made up of the International Trade Union Confederation (ITUC), which has 181 million members in 163 countries; the Global Union Federations (GUFs), which represent their respective sectors at the international trade union level (BWI, EI, IAEA, IFJ, IndutriALL, ITF, IUF, PSI and UNI); and the Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD.

unemployment rate in 2017 due to a deterioration in emerging economies (Global Wage Report 2016/17; World Employment and Social Outlook — Trends 2017). The ILO further estimates that there will be only slight improvements for those at the bottom of the income scale in 2017. Close to 43 per cent of workers worldwide will remain in a situation of vulnerable employment and almost 29 per cent in “working poverty”. The fair and effective integration of migrants and refugees into labour markets is also a key concern, as these populations are often vulnerable to unemployment, low quality jobs and social exclusion.

7. The IFIs currently predict that the economies of emerging and developing countries will grow more than twice as fast as developed countries, which as a whole have grown at an average annual rate of only 1.6 per cent since 2010. Indications of increased joblessness and slowing wages in emerging economies identified by the ILO will undermine the IFIs’ predictions of improved growth prospects for the entire global economy in 2017 and 2018.

8. Some IFI forecasts note that political developments over the past year will further complicate attainment of a sustainable growth path for the global economy. The rise of right-wing nationalism in several countries is of great concern to trade unions around the world, but the response of policymakers should not be to ignore the growing lack of confidence in the global economic system. For years, some international institutions including the IFIs have shrugged off the adjustment costs from trade liberalization and the losses suffered by a significant number of working people from trade and investment agreements. Further liberalization without fairer rules for all is not the way forward. As a recent Trade Union Statement to G20 Finance Ministers² noted, policymakers must correctly identify the direction of causality between trade and growth when they formulate policy responses:

“The recent trend of trade slowing down is mainly caused by weak domestic demand (prompted by austerity, internal devaluation, debt deleveraging), not by a surge in protectionism. Ignoring this causality by trying to push for more trade runs the risk of falling into the ‘competitiveness’ trap where economies depress wages in order to try to export themselves out of the crisis, which ends up deepening the global lack of demand, further slowing down trade dynamics.”

9. The IMF and World Bank should endorse a rebalancing of investors’ rights and obligations in trade and investment agreements by supporting the inclusion of enforceable labour provisions based on ILO standards, as well as the repeal of investor-state dispute settlement mechanisms that undermine governments’ right to regulate. To respond to the global lack of aggregate demand, growing inequality and the challenge of climate change, Global Unions urge the IFIs to support an extensive programme of public investment in energy efficient infrastructure and quality public services, and coordinated wage increases.

Promote gender equality through decent work and public investment in social infrastructure

10. Gender equality and female labour force participation efforts must deliver lasting economic empowerment for women. Working women around the world are often concentrated in precarious, low-wage jobs in the service sector, domestic work and the bottom end of global value chains, and women are more likely than men to have informal jobs. Meaningful progress on decent work and transition from the informal to formal economy will be a particular boon for women and drive inclusive development. The global economy currently functions through the underpaid and unpaid work of women. Increasing female labour force participation in isolation from a decent work agenda will fail to adequately address gender equality.

11. Progress on gender equality is undermined by policy advice and conditionality involving austerity for social programmes, public sector retrenchments, labour market deregulation, cutbacks in public services and dismantling of collective bargaining systems. In Greece, labour market reforms and austerity applied at the behest of the IMF and EU creditors disproportionately affected women through job losses in the majority-female public sector, increased precarious work and a spike in gender-based firings. Women suffer

² TUAC, March 2017 (http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/13/2C/document_doc.phtml).

most when social programmes are cut and care reverts to unpaid labour. Global Unions commend the IMF for supporting increased female labour force participation, for example in the 2016 Egypt programme, but caution that the failed model of austerity now being applied in the Middle East and North Africa will harm women and risks outweighing progress in participation.

12. Global Unions urge the IFIs to support public investment in social infrastructure, including health, education and care systems. Investing in the care economy in particular, would help to create jobs, raise productivity, reduce the burden of unpaid labour and catalyse economic growth.³ Responsible public investment is needed in this sector along with improved job quality for care workers in order to improve the attractiveness of jobs in the sector, address shortages in the supply of care services and ensure the accessibility and quality of these services. Expansion of social infrastructure will create new physical infrastructure projects and procurement that offer further economic benefits. Global Unions support investments in both physical and social infrastructure, and call on the IFIs to promote them in tandem.

13. Gender budgeting with the participation of social partners will also help achieve gender equality. In Iceland, where 86 per cent of the workforce is unionized, tripartite dialogue led to adoption of the Equal Pay Standard, a trailblazing initiative and global example. The core labour standards of collective bargaining and freedom of association give women effective tools to create safe workplaces free from violence, harassment, discrimination and health and safety risks. The full realization of these rights is central to gender equality.

Financing a just transition to a sustainable global economy

14. A zero-carbon, zero-poverty future is possible through a coherent response to the social, economic and climate challenges facing our world. The influence and financial resources of the IFIs are necessary to reach this future through a just and equitable transition. The conversion to a sustainable economy can be a net creator of jobs, but the substantial economic changes involved could leave workers behind and create further inequality. The danger of unemployment, forced migration and rising energy costs loom over working people.

15. Sustainable infrastructure built in the coming years can form the backbone of a sustainable global economy involving better transport, agriculture, industry and more. Public investment in essential services — such as housing, electricity, sanitation and water — is also essential in order to enable individuals to fully participate in society as well as the labour market. Major climate change mitigation projects are also necessary. Global Unions urge the World Bank to take a leadership role in ensuring that global infrastructure is sustainably built, energy-efficient and creates quality jobs. The IMF and World Bank can assist countries in policy and fiscal planning for a just transition and the achievement of the Nationally Defined Commitments under the UN Framework Convention on Climate Change. Additionally, the IFIs can follow up on their research on carbon taxes as well as discussions held with trade unions and other parties and move toward implementation. Equitable carbon taxes can fund a just transition and investments in infrastructure.

16. The shocks of climate change, including rising sea levels and temperature changes, will increasingly displace people from their jobs and homes. This problem will particularly affect lower-income people in developing countries. Adequate, universal social protection is needed to help working people survive and adjust. Whenever possible, plans should be made to directly help fossil fuel workers transition to new jobs. This is especially important for communities with low levels of economic diversification that rely on a single facility or sector, where retooling facilities to sustainable activities is one way to create a direct path to jobs. Social dialogue is crucial to planning these changes at the local, national and international level. Global Unions ask the IFIs to support dialogue and the negotiation of binding agreements for sustainable economic transformation.

³ ITUC, *Investing in the Care Economy*, January 2017 and March 2016 (<https://www.ituc-csi.org/investing-in-the-care-economy>).

Reduction of inequality: Actions should follow words

17. The IFIs' increased attention to the negative impacts of income and wealth inequality and its causes is a welcome development. The World Bank has emphasized that measures to make income distribution more equal are a necessary condition for attainment of Sustainable Development Goal 1.1 on eradicating extreme poverty, as well as SDG 10.1 on boosting the bottom 40 per cent (Poverty and Shared Prosperity, October 2016). The IMF has published several research papers showing that countries with lower inequality have higher and more durable growth; that fiscal policies have become less redistributive in most countries; and that weaker labour market regulations and institutions, reflected in declining trade union density and collective bargaining coverage, are the main drivers of increased inequality in many countries.

18. However, action in lending programmes or country-level policy advice has been slow to catch up to the IFIs' discourse and research on the need to reduce inequality. Many IMF programmes or policy recommendations continue to support measures that weaken minimum wages, employment protection regulations or collective bargaining institutions. For example, the IMF has encouraged many countries to substantially weaken or dismantle national or sector-level collective bargaining, despite the role that coordinated collective bargaining systems have played in achieving more equal income distribution. In February 2017, the UN's Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations submitted a report to the Human Rights Council, which documented numerous cases of the IMF promoting austerity-related labour market reforms that erode workers' rights.⁴ The report found little evidence that the deregulatory measures, put forward on the pretext of preventing or resolving debt crisis, contributed to economic recovery; but they did contribute to increased inequality.

19. The Fund's advice or loan conditions in the area of social policy have also had potentially troubling impacts on inequality. Some IMF programmes include a "social spending floor" as a Quantitative Indicative Target, but these are purely symbolic since a failure to meet minimum spending targets has no effect on loan disbursements. The main object of IMF involvement in social programme reforms is to control their fiscal cost, not to improve their adequacy or coverage. In some countries, for example in Egypt, the Fund and the Bank have supported the extreme targeting of social benefits over universal approaches: for example by replacing universal consumer subsidies with severely means-tested benefits. The "proxy means test" mechanism often used has been shown to typically exclude 50 per cent or more of those that should be eligible by virtue of income level, according to research published by the ILO.⁵ Social protection reform measures promoted by the IFIs that leave a majority of lowest-income people without any assistance are incompatible with inequality reduction and shared prosperity goals.

20. To its credit, the World Bank has in recent years expressed support for universal healthcare coverage and universal social protection. In 2016, it launched a joint programme with the ILO for increasing the number of countries with universal protection. The Bank has endorsed these initiatives in conformity with its support for the SDGs, specifically targets 1.3 on social protection for all and 3.8 on universal health coverage. The Bank should ensure that its country programmes deliver on the promise of protection for all by helping establish comprehensive systems based, for example, on the social protection floor concept developed at the ILO. The IMF should also support this approach, following up on country-level research work it has already been involved in for identifying fiscal space for social protection floors.

21. Additionally, the World Bank has supported the SDG targets linked to Goal 4 on ensuring inclusive and quality education for all, which is another key instrument for achieving more equal distribution of income as well as contributing to countries' growth of

⁴ United Nations Human Rights Council, A/HRC/34/57, 27 December 2016 (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/57).

⁵ Kidd, Gelders and Bailey-Athias, *Exclusion by design: An assessment of the effectiveness of the proxy means test poverty targeting mechanism*, (<http://www.developmentpathways.co.uk/resources/wp-content/uploads/2017/03/Exclusion-by-design-An-assessment-of-the-effectiveness-of-the-proxy-means-test-poverty-targeting-mechanism-.pdf>).

productivity and access to prosperity. The Bank's 2018 World Development Report, on the theme of "Education for Development", provides an opportunity for the institution to describe in detail the strategies it needs to develop to support education targets, starting with SDG target 4.1: "By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes". The Bank should make certain that all the schooling initiatives it supports are consistent with and supportive of the commitment to free, equitable and quality education.

Cooperation for implementing World Bank's new labour safeguard

22. If the World Bank's announced plans are respected, in 2018 it will join several other multilateral development banks (MDBs) that, over the past several years, have implemented comprehensive labour standards lending requirements or safeguards. "Environmental and Social Standard 2: Labour and Working Conditions" (ESS 2) is part of the Bank's new Environmental and Social Framework, adopted in August 2016. ESS 2 provides for basic occupational health and safety requirements, obligations to provide information to workers and a requirement to respect certain fundamental workers' rights.

23. The World Bank's introduction of a labour safeguard is an important development, but the effectiveness may be impaired by the fact that in some aspects its version is weaker than those of the other MDBs. Principal among the weaknesses is the absence of any reference to the core labour standards (CLS) conventions of the ILO, which prohibit discrimination, child labour and forced labour, and require respect for freedom of association and the right to collective bargaining. Whereas ESS 2 stipulates that the first three practices will not be tolerated in Bank-funded projects whether or not they are prohibited in the client country's law, it requires respect of freedom of association only "in a manner consistent with national law". This proviso is at odds with the requirements of the other MDBs and also contrary to the universal nature of the CLS as established by the ILO since 1998.

24. In order to avoid that weaknesses or ambiguities in ESS 2 lead to tolerance of unacceptable labour practices or denial of workers' rights in Bank-financed activities, it will be imperative that the Bank cooperates fully with parties knowledgeable about the labour conditions in its projects and programmes, notably the ILO and trade unions. The Bank should move forward with cooperation as it develops staff directives, training material, monitoring mechanisms and consultation procedures for implementing ESS 2. The Bank should also examine possibilities of working jointly with other MDBs that have had years of prior experience in implementing labour safeguards. Joint work could take place, for example, in training of staff and project managers on labour standards requirements, and in establishing effective monitoring and information-gathering procedures to identify risks of safeguards violation.

Global Unions' recommendations

Measures to support economic recovery

25. The IMF and World Bank should

- Support and help implement a global recovery strategy aimed at boosting aggregate demand and consisting of a policy mix of public investment stimulus and coordinated wage increases to reverse the falling labour share in national income.
- Contribute, as part of this strategy, to public investments in education, the care economy, water and sanitation and other quality public services, including actions to support the integration of migrants and refugees.
- Support public investments in energy-efficient infrastructure and climate change mitigation projects to protect against climate change damages, improve long-term productive potential, and support the transition to a low-carbon economy including through the adoption of carbon taxes.

- Support the inclusion in trade and investment agreements of enforceable labour provisions based on ILO standards and the repeal of investor-state dispute settlement mechanisms that undermine governments' right to regulate.

Measures for creating decent work and reducing inequality

26. The IMF and World Bank should

- End the promotion of labour market deregulation, including through its funding conditionality, and instead help to reverse the rise in income inequality by supporting social dialogue, strengthened collective bargaining and robust minimum wages as part of a coherent set of labour market and social policies for more inclusive growth. This work should entail enhanced cooperation with international organizations with expertise in labour market and social policy, such as the ILO and World Health Organization.
- Support gender equality and women's economic empowerment through wage increases, formalization and respect of workers' rights in majority-female sectors, along with public investments, notably in the care economy, to create quality jobs and reduce the burden of unpaid labour.
- Help countries restore or establish fiscal policies that reduce inequality through more progressive tax regimes including through greater tax revenues from higher incomes, and increased coverage of social protection programmes.
- Develop actions to contribute to attainment of the Sustainable Development Goals, which include targets on full and productive employment, protection of workers' rights, reduction of inequality, universal health coverage, universal primary and secondary education, and national social protection systems for all including floors.

27. The World Bank should

- Ensure that its projects and programmes respect fundamental workers' rights and provide safe working conditions and adequate wages, and work jointly with trade unions and the ILO in the implementation of "Environmental and Social Standard 2: Labour and Working Conditions" to ensure that Bank-financed activities comply fully with recognized international labour standards.
- Examine possibilities of joint work with other development banks that have adopted labour safeguards on their implementation, for example in training activities and developing effective monitoring procedures.

Measures for effective financial regulation and taxation

28. The IMF should

- Support the extension and completion of steps taken since 2008 to correct under-regulation of the financial sector, such as shadow banking systems, too-big-to-fail financial groups and under-taxation of the financial industry, and oppose efforts to roll back the measures already adopted.
- Support the creation of a multilateral framework for negotiating binding international debt restructuring agreements when countries face unsustainable sovereign debt.
- Promote stronger actions to counter the erosion of tax bases and achieve reform of taxation systems in order to move towards broader-based and more progressive taxes, and to shift taxation from employment to environmentally damaging and non-productive activities.
- Support stronger measures to ensure that fiscal revenue is not lost through tax havens by requiring automatic exchange of information and action to stop base erosion and profit shifting by multinational enterprises.

- Support the introduction of financial transactions taxes to discourage speculative behaviour and create new sources of finance, including by offering assistance for the coordinated implementation of the comprehensive FTT initiative supported by several Eurozone countries.

Anexo V

[Inglés únicamente]

Statement by the Intergovernmental Group of 24 at the 2017 Spring meeting of the World Bank and the International Monetary Fund (excerpts)

1. We held our ninety-seventh meeting in Washington D.C. on April 20, 2017 with Abraham Tekeste, Minister of Finance and Economic Cooperation of Ethiopia in the Chair, Ravi Karunanayake, Minister of Finance of Sri Lanka as First Vice-Chair; and Julio Velarde, Governor of the Central Bank of Peru as Second Vice-Chair.

Financing for Development

8. Strong fiscal frameworks are essential to mobilize domestic resources to effectively support development efforts. We are encouraged by the progress made in improving tax revenue-to-GDP ratios and enhancing spending efficiency in EMDCs. Progressive and growth-enhancing tax policies and expenditure measures also play an important role in improving income equality and broadening opportunity. We underscore the important role of IFIs and donors in supporting capacity building for revenue mobilization and encourage more peer learning and capacity building among EMDCs through collaborative platforms. We welcome the work of the Platform for Collaboration on Tax and look forward to its engagement with tax officials in EMDCs.

9. We welcome ongoing initiatives on international tax cooperation such as the Automatic Exchange of Information (AEOI) initiative and the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), and call for a framework that ensures effective participation of EMDCs. We support the development of a digital global platform with least compliance cost for implementation of AEOI. We appreciate the work of the UN Tax Committee and encourage multilateral support to upgrade the Committee to an intergovernmental body to enhance the voice of EMDCs on international tax policy matters. We also call for more attention to developing fair tax rules to guide the taxation of multinational corporations and for international cooperation to prevent harmful international tax competition, negative spillovers from shifts in tax policies in major countries, and illicit financial flows ...

Reforming the Bretton Woods Institutions

15. We support a quota-based, adequately-resourced IMF that is less dependent on borrowed resources. We call for the full implementation of the 2010 Governance Reforms on Board Representation. We call for the completion of the 15th General Review of Quotas, including a new quota formula, by the Spring Meetings of 2019 and no later than the Annual Meetings of 2019. We call for a revised quota formula that further shifts quota shares from AEs to dynamic EMDCs, reflecting their growing weight in the global economy, while protecting the quota share of the poorest countries, and puts greater weight to GDP PPP within the GDP blend. The realignment of quota shares must not come at the expense of other EMDCs. We reiterate our longstanding call for a third Chair for Sub-Saharan Africa, provided that it does not come at the expense of other EMDCs' Chairs.

16. We look forward to a World Bank's Shareholding Review that upholds the Istanbul Principles to achieve equitable voting power between developed and developing and transition countries (DTCs), and produces an outcome that is broadly acceptable to the membership, while protecting the smallest poor countries. We call for the timely implementation of the Lima Roadmap. As the review moves toward the conclusion of the new shareholding package, we call for exploring options to ensure a meaningful realignment with a balanced shareholding outcome, including allocations in line with the agreed formula, special allocations, forbearance, and limits on dilution of individual DTCs.

17. We reiterate our support for a stronger WBG to provide continued assistance to developing countries of all income levels, as laid out in its Forward Look. In the meantime, we are concerned with the IBRD's and IFC's strained financial capacity and the consequent expected decrease in annual lending over the coming years. This will adversely affect the WBG's ability to engage its member countries and to catalyze private financing, which are essential to meet the ambition of its Forward Look. To strengthen the financial capacity of the IBRD and IFC and build on their ability to leverage their shareholders' capital, we call for exploring all options, including capital increases, further balance sheet optimization, and review of financial transfers from IBRD and IFC to IDA. Furthermore, we recognize the importance of having a balanced portfolio, which contributes to the financial sustainability of IBRD. We welcome the shift in the WBG's development financing approach towards greater strategic use of official resources to further catalyze public and private investments and mobilize private capital.

18. We call for strengthening the efforts of the IMF and the WBG towards greater representation of under-represented regions and countries in recruitment and career progression, including at managerial levels. We reiterate the importance of staff diversity and gender balance at all levels, including diversity of educational institutions.

Anexo VI

[Inglés únicamente]

Declaration of the Coalition on Human Rights and Development, Petition of 14 July 2016

1. (Washington, July 14, 2016) — Development banks should respect human rights in their investments around the world and ensure their activities are not putting human rights defenders at risk, the Coalition for Human Rights in Development said today in a joint petition signed by over 150 developments, human rights, and environment groups.

2. Major development banks have long touted the importance of public participation for effective development, the organizations said. But a growing number of governments have been shrinking the space for safe and effective participation in development processes through criminalizing activities by land, environment, and human rights activists and adopting restrictions on nongovernmental groups.

“I hope that civil society will have the opportunity to contribute towards sustainable development,” said Abhijeet, an Indigenous community member in Nepal who does not want his identity disclosed for security concerns. “Unfortunately, the fundamental human rights of many peoples are being systemically violated as a result of development projects. And when we help communities defend their rights we are met with threats and violent attacks.”

3. The petition is directed to international financial institutions (IFIs), including the World Bank, African, Asian, European, and Inter-American Development Bank, as well as the newest institutions, the Asian Infrastructure Investment Bank, and BRICS New Development Bank.

4. In March 2016, Berta Cáceres, a renowned indigenous land rights and environmental defender in Honduras, was killed in the middle of the night as she slept in her bed. Two of those facing charges for Cáceres’ murder were employees of a company involved in the construction of the Agua Zarca dam, a project that Cáceres and her organization, Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), have long opposed and campaigned against. The murder sparked a high-profile movement to demand accountability of the Dutch, Finnish, and Central American banks financing Agua Zarca for failure to ensure their investments weren’t fuelling human rights abuses.

5. But as recent reports have documented, the Cáceres case is not unique.

“In Uzbekistan, the World Bank is pouring money into projects that benefit the government’s abusive cotton sector, marred primarily by systemic forced labor,” said Dmitry Tikhonov, an Uzbek human rights defender who is in exile following government reprisals. “The World Bank has not taken any meaningful measures to ensure that independent human rights defenders like me can monitor for abuses linked to the projects they fund. Nor have Bank staff spoken out against the government’s attacks on my colleagues and I.”

6. Human Rights Watch has recently documented numerous abuses against individuals and communities impacted by projects financed by the World Bank and its arm for corporate loans, the International Finance Corporation.

“Those who try to engage in development processes have suffered threats, harassment, physical assault, or worse,” said Jessica Evans, senior international financial institutions advocate at Human Rights Watch. “Development banks have a responsibility to ensure that their investments don’t interfere with human rights, and that people can participate in or express their opinions about development projects without fearing for their safety.”

7. The joint petition — International Financial Institutions’ responsibility to ensure Meaningful and Effective Participation in their Investments — details ways in which the institutions should

“ensure that the activities they finance respect human rights and that there are spaces for people to participate in the development of IFI projects and hold IFIs to account without risking their security.” The organizations call on the financial institutions “to actively support the realization of rights to freedom of expression, assembly, and association, and related human rights, including economic, social and cultural rights in all their activities.”

“Development banks and their member states can’t hope to achieve sustainable development or eliminate poverty if their investments are contributing to human rights violations or if those who are meant to benefit from development find themselves subjected to abuse,” said Adam Shapiro, Head of Communications and Visibility for Front Line Defenders. “The banks should take responsibility for the outcomes of their investments and take meaningful action to safeguard human rights defenders on the ground.”

Anexo VII

[Inglés únicamente]

Summary of CAO Cases

1. The CAO investigation of IFC Investment in Eco Oro Minerals Corp. Ltd., a Canadian mining company conducting open-pit mining in Colombia. Concerning the lack of consultation and disclosure the CAO concluded:

“IFC identified significant gaps in the company’s stakeholder engagement strategy as the project proceeded. This became evident in late 2009, following the submission of the open-pit mine EIA to the government that was rejected due to non-conformance with national requirements. IFC recognized that the project faced considerable opposition from the citizens of Bucaramanga. At this point IFC recommended that the company improve its stakeholder engagement strategy so as to strengthen community support. CAO notes that the limited scope applied to the project at appraisal and categorization of the investment for IFC’s purposes did not reflect affected community members’ understanding of risks.”

2. With regard to community health, safety and security, CAO determined that:

“there was not sufficient information to establish whether IFC assured itself of the company’s compliance with PS4 requirements.”

3. With regard to conservation and sustainable natural resource management, CAO concluded:

“IFC supervision documentation does not show substantive progress on the completion of necessary studies. IFC has not pursued a remedy, but has made subsequent investments in the company.”

4. The CAO investigation in Corporación Dinant S.A. de C.V., Honduras, published in December 2013 made findings that should have motivated IFC to fundamentally review its practices:

“IFC was or should have been aware of a series of public allegations and negative perceptions in relation to its client that went significantly beyond those that were considered in the course of its integrity due diligence process... The detailed six-part integrity due diligence process should have been adhered to. IFC’s failure to do this was out of compliance with the relevant procedure. ...IFC’s failure to disclose the Dinant E&S Assessment was not compliant with its Policy on Disclosure of Information (para 13). IFC remains non-compliant on this point. IFC supported a breach of Performance Standard 1 (paras 20 & 26) by (a) accepting the client’s disclosure of a modified translation of the ESRS in the place of the E&S Assessment, and (b) failing to assure itself that the client’s ESAP was disclosed to affected communities in an accessible form. IFC failed to ensure that the Dinant E&S Assessment met the consultation requirements set out in PS1 (para.21) ... IFC failed to adequately assess its client’s performance against the full range of ESAP CODs that had fallen due prior to making its November 2009 disbursement to Dinant ... IFC failed to “develop and retain the information needed to assess the status of [its client’s] compliance with the Performance Standards during supervision ...

5. In the light of the above, IFC decided to continue financing Dinant indirectly, through loans to Honduran Banks. The CAO Investigation of IFC Environmental and Social performance in relation to Investments in Banco Financiera Comercial Hondureña concerned the circumvention of WB rules concerning upper limits for loans to projects by providing the loans to banks that would in turn loan to the project — no strings attached. The IFC had already lent \$15 million to an agribusiness company in Honduras, which was

under investigation in connection to allegations of violence against farmers on and around Dinant palm oil plantations. The CAO found that:

“IFC took insufficient measures to identify activities where Ficohsa was exposed to environment and social risk through its existing portfolio. This is of particular concern given background E&S risk that emerges from the regulatory and governance context in which Ficohsa was operating.”

6. CAO further noted that IFC had failed to conduct an adequate review of Ficohsa’s social and environmental management system, or its capacity to implement IFC’s environmental and social requirements.

“As a result, IFC acquired an equity stake in a commercial bank with significant exposure to high risk sectors and clients, but which lacked capacity to implement IFC’s environmental and social requirements ... This included additional exposure to Dinant, a company which IFC knew to be affected by a violent land conflict.”

7. In relation to the decision to disburse, CAO found that IFC’s review of the applicable conditions of disbursement did not comply with the requirement that E&S staff clear any E&S conditions following a review of evidence of compliance:

“CAO finds that IFC cleared disbursement against its investment agreements, without assuring itself that Ficohsa had submitted the environmental and social information that was required.”

8. In relation to project supervision CAO found that:

“IFC had not assured itself in an adequate or timely manner that Ficohsa was operating as envisaged at the time of appraisal or that Ficohsa was applying the Performance Standards to its sub-projects”.

9. In relation to Dinant, CAO found that:

“highly relevant information on the conflict and related D&S risks surrounding Dinant, that was held by members of IFC’s Dinant investment team, was not shared with key members of its Ficohsa team, even though there were staff working across both teams ... By waiving a key financial covenant and then taking an equity position in Ficohsa, however, IFC: (a) increased its exposure, and (b) facilitated a significant ongoing flow of capital to Dinant, outside the framework of its environmental and social standards; and thus at a time when IFC management was aware of serious unmitigated environmental and social risks regarding its agribusiness client.”

10. This remarkable investigation also sought to explain the underlying causes of the numerous instances of non-compliance. CAO observed:

“a primacy of financial considerations in IFC’s decision making”. CAO also noted “a siloing of information with the result that relevant information was not shared among key members of IFC’s Ficohsa team.”

Anexo VIII

[Inglés únicamente]

Inspection Panel Form — Sample form

(More information about the Inspection Panel Form is available at:
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Documents/Guidelines_How%20to%20File_for_web.pdf)

To: Executive Secretary, the Inspection Panel
1818 H Street NW, MSN 10-1007, Washington,
DC 20433, USA Email: ipanel@worldbank.org
or the appropriate World Bank Country/Regional Office

- We [insert names] live and/or represent others who live in the area known as [insert name of area].
- Our addresses are attached.
- We have suffered, or are likely to suffer, harm as a result of the World Bank's failures or omissions in the [insert name and/or brief description of the project or program] located in [insert location/country].
- [Describe the damage or harm you are suffering or are likely to suffer from the project or program.]
- [List (if known) the World Bank's operational policies you believe have not been observed.]
- We have complained to World Bank staff on the following occasions [list dates] by [explain how the complaint was made]. No response was received, [or] we believe that the response received is not satisfactory as it does not answer or solve our problems for the following reasons:
- We request the Inspection Panel recommend to the World Bank's Executive Directors that an investigation of these matters be carried out.

Signatures:

Date:

Contact address, telephone number, fax number, and e-mail address:

List of attachments

We [do/do not] authorize you to disclose our identities

Bibliography

Action for Solidarity Environment Equality and Diversity (ASEED), World Bank Conditionality — Poor Deal for Poor Countries, Amsterdam, 2008.

Yilmaz Akyüz, Crisis Mismanagement in the United States and Europe: Impact on Developing Countries, South Centre, Geneva, 2014.

Aviva, A Roadmap for Sustainable Capital Markets: How can the UN Sustainable Development Goals harness the global capital markets? London, 2015.

Radhika Balakrishnan, James Heintz and Diane Elson, Rethinking Economic Policy for Social Justice, Routledge, London, 2016.

Graham Bird and Dane Rowlands, The International Monetary Fund: Distinguishing Reality from Rhetoric, Edward Elgar, Cheltenham, 2016.

Daniel Bradlaw, “The World Bank, the IMF and Human Rights”, *Transnational Law and Contemporary Problems* 6: 47-90, 1996.

Bretton Woods Project,

(a) Behind the fumes: the dirty truth behind the World Bank’s commitments on climate change, 2017, <http://www.brettonwoodsproject.org/2017/01/behind-noxious-fumes-dirty-truth-behind-banks-commitments-climate-change/>;

(b) One man, one vote, one option: World Bank set to coronate Kim for second term, 2016, <http://www.brettonwoodsproject.org/2016/09/one-man-one-vote-one-option-world-bank-set-coronate-kim-second-term/>;

(c) The Bank and the IMF in 2016: year in review, 2017, <http://www.brettonwoodsproject.org/2017/02/bank-imf-2016-year-review/>;

(d) The rise and fall of World Bank funded megaprojects, 2017, <http://www.brettonwoodsproject.org/2017/01/rise-fall-world-bank-funded-megaprojects/>;

(e) The World Bank’s failed accountability experiment: Why the Inspection Panel’s ‘Pilot’ should dead end, 2016, <http://www.brettonwoodsproject.org/2016/08/world-banks-failed-accountability-experiment-inspection-panels-pilot-dead-end/>.

Compliance Advisor Ombudsman (CAO),

(a) A Journey Toward Solutions: A Story of Community-Company Dispute Resolution in Uganda, Washington, DC, 2015;

(b) Building Hope and Health through Dialogue: A Story of Company-Community Dispute Resolution in Nicaragua, Washington, DC, 2016;

(c) Solutions, Accountability, Learning: Annual Report 2016, Washington, DC.

Corporate Europe Observatory, Profiting from Crisis, Brussels, 2014.

Robert T. Coulter, Leonardo A. Crippa and Emily Wann, “Principles of International Law for Multilateral Development Banks: The Obligation to Respect Human Rights,” in *Free, Prior and Informed Consent: Pathways for a New Millennium*, American Indian Law Program and Getches-Wilkinson Center for Natural Resources, Energy & the Environment, University of Colorado Law School, Boulder, 2013.

Mac Darrow, *Between Light and Shadow: The World Bank, the International Monetary Fund and International Human Rights*, Oxford, 2003.

Peter Dolack, *It’s Not Over: Learning from the Socialist Experiment*, Zero Books, Portland, Oregon, 2016.

Marwan Elkhoury, *Credit Agencies and their Potential Impact on Developing Countries*, UNCTAD Discussion Paper No. 166, 2008.

Marco Fasciglione, “The Protection of Economic, Social and Cultural Rights of Persons Belonging to Marginalized and Vulnerable Groups in Times of Financial Crisis: How to Reconcile the Irreconcilable?” *European Yearbook of Minority Issues* 11: 5-58, 2012.

Maria Lucia Fattorelli, *Citizen Public Audit*, CETIM, Geneva 2014.

David Freestone, *The World Bank and Sustainable Development*, Martinus Nijhoff, Leiden 2013.

Sanae Fujita, “The challenges of mainstreaming human rights in the World Bank”, *The International Journal of Human Rights*, March 5(3): 374-396, 2011.

Willem van Genugten, *The World Bank Group, the IMF and Human Rights. A Contextualised Way Forward*, Intersentia, Cambridge, 2015.

Willem van Genugten, Paul Hunt and Susan Matthews (eds.), *The World Bank, IMF and Human Rights: A Contextualised Way Forward*, Intersentia, Nijmegen, 2003.

Susan George, *Shadow Sovereigns: How Global Corporations are Seizing Power*, Transnational Institute, Amsterdam, 2015.

Paul Gertler et al., *Impact Evaluation in Practice*, Inter-American Development Bank and World Bank, Washington, DC, 2016.

François Gianviti, “Economic, Social and Cultural Rights and the International Monetary Fund”, in IMF, *Current Developments in Economic and Financial Law*, Oxford University Press, 2005.

Khalil Hamdani and Lorraine Ruffing, *United Nations Centre on Transnational Corporations: Corporate Conduct and the Public Interest*, Routledge, London 2015.

Günther Handl, *Multilateral Development Banking: Environmental Principles and Concepts Reflecting General International Law and Public Policy*, Kluwer, 2001.

John F. Helliwell, Haifang Huang, Shawn Grover and Shun Wang, *Good Governance and National Well-Being: What Are the Linkages?* OECD Working Paper on Public Governance No. 25, Paris, 2014.

John F. Helliwell, Haifang Huang and Shun Wang,

(a) *New Evidence on Trust and Well-being*, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 22450, Cambridge, 2016;

(b) “Social capital and Well-Being in Times of Crisis”, *Journal of Happiness Studies*, 15(1): 145-162, 2014.

John Helliwell, Richard Layhard and Jeffrey Sachs (eds.),

(a) *World Happiness Report 2016 Update*.

(b) *World Happiness Report 2017*.

Human Rights Watch,

(a) *Abuse-Free Development: How the World Bank Should Safeguard against Human Rights Violations*, 2013;

(b) *At Your Own Risk: Reprisals against Critics of World Bank Group Projects*, 2015;

(c) *Development without Freedom: How Aid Underwrites Repression in Ethiopia*, 2010;

(d) *Harassed, Imprisoned, Exiled: Azerbaijan’s Continuing Crackdown on Government Critics, Lawyers and Civil Society*, 2016;

(e) *Toxic Toil: Child Labor and Mercury Exposure in Tanzania’s Small-Scale Gold Mines*, 2013;

(f) *Waiting Here for Death: Forced Displacement and “Villagization” in Ethiopia’s Gambella Region*, 2012;

(g) World Bank Group: India Tea Investment Tramples Rights, 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/11/08/world-bank-group-india-tea-investment-tramples-rights>.

International Finance Corporation, IFC Sustainability Framework Policy and Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012.

International Labour Organization, Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up (1998, with annex revised 15 June 2010)

International Monetary Fund, The Managing Director's Global Policy Agenda: A More Inclusive and Resilient Global Economy, 2017.

International Monetary Fund Independent Evaluation Office, The IMF and the Crises in Greece, Ireland and Portugal, Washington, DC, 2016.

International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net), Ten Key Proposals for the Treaty: A Legal Resource for Advocates and Diplomats Engaging with the UN Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations, 2016.

Omer Javed, The Economic Impact of International Monetary Fund Programmes, Springer, Heidelberg, 2016.

Naomi Klein, The Shock Doctrine, Penguin Books, London, 2008.

Pierre Klein, "The Attribution of Conduct to International Organizations" in James Crawford et al. (eds.), The Law of International Responsibility, Oxford, 2010.

Sangheon Lee, Deirdre McCann and Nina Torm, The World Bank's "Employing Workers index: Findings and critiques", International Labour Review 147(5): 416-432, 2008.

Jakob Möller and Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Case-Law, N.P. Engel, Strasbourg, 2009.

Oakland Institute, Down on the Seed: The World Bank Enables Corporate Takeover of Seeds, 2017.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),

(a) Comments and Recommendations in relation to the draft Environmental and Social Framework, 2015;

(b) Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, New York and Geneva, 2011;

(c) Realizing the Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development, New York and Geneva, 2013.

Oxfam, The IFC and Tax Havens: The need to support more responsible corporate tax behaviour, Oxford, 2016.

Oxfam, World Bank, <https://www.oxfam.org/en/tags/world-bank>.

August Reinisch, The Privileges and Immunities of International Organizations in Domestic Courts, Oxford University Press, 2013.

August Reinisch and J. Wurm, "International Financial Institutions before National Courts" in Daniel D. Bradlow and David B. Hunter, International Financial Institutions and International Law, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2010.

Jeffrey Sachs, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, United Nations Development Programme, 2005.

Margot Salomon and Clin Arnott, "Better Development Decision-Making: Applying International Human Rights Law to Neoclassical Economics", Nordic Journal of Human Rights 32 (1): 44 -74, 2014.

Joseph E. Stiglitz Globalization and Its Discontents, W. W. Norton & Company, New York, 2003.

Sustainable Development Solutions Network, *An Action Agenda for Sustainable Development: Report for the UN Secretary General*, 2013.

The World Bank Should Champion Human Rights, *New York Times* (27 June 2016).

Transnational Institute, *Land grabbing and Land Concentration in Europe*, Amsterdam, 2016.

United Nations General Assembly, *Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)*, Resolution 69/313.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),

- (a) *Annual Report 2015: Delivering a Sustainable Development Agenda*;
- (b) *Key Statistics and Trends in Trade Policy 2016: G20 Policies and Export Performance*, Geneva, 2017;
- (c) *Trade and Development Report 2014: Global governance and policy space for development*;
- (d) *Trade and Development Report 2015: Making the international financial architecture work for development*;
- (e) *Trade and Development Report 2016: Structural transformation for inclusive and sustained growth*;
- (f) *World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: an Action Plan*, New York and Geneva;
- (g) *World Investment Report 2015: Performing International Investment Governance*, New York and Geneva;
- (h) *World Investment Report 2016: Investor Nationality, Policy Challenges*, New York and Geneva;
- (i) *World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy*, Geneva.

United Nations Department for Economic and Social Affairs,

World Economic and Social Survey 2017, New York.

United Nations Development Programme,

- (a) *Human Development Reports 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*, New York;
- (b) *Human Development Report 2015: Work for Human Development*, New York;
- (c) *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*, New York.

United Nations Global Compact, *Corporate Sustainability and the United Nations Post-2015 Development Agenda*, 2013.

Wouter Vanderhole (ed.), *Challenging Territoriality in Human Rights Law: Building Blocks for a Plural and Diverse Duty-Bearer Regime*, Routledge 2015.

World Bank & IMF, *International Union Rights 24: 1-28*, 2017.

World Bank Group.

- (a) *Action Plan: Improving the Management of Safeguards and Resettlement Practice and Outcomes*, 2015;
- (b) *Atlas of Sustainable Development Goals 2017: From World Development Indicators*, Washington, DC;
- (c) *Climate Change Action Plan*, 2016;

- (d) Doing Business 2017: Equal Opportunity for All, Washington, DC;
- (e) Enabling the Business of Agriculture 2017, Washington, DC;
- (f) Environmental and Social Framework, 2017;
- (g) Global Economic Prospects January 2017: Weak Investments in Uncertain Times, Washington, DC;
- (h) Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change, Washington, DC, 2016;
- (i) “Globalization Backlash,” South Asia Economic Focus: Spring 2017, Washington, DC, 2017;
- (j) Involuntary Resettlement Portfolio Review: Phase I: Inventory of Bank-financed Projects Triggering the Involuntary Resettlement Policy (1990-2010), 2012;
- (k) Involuntary Resettlement Portfolio Review: Phase II: Resettlement Implementation, 2014;
- (l) Public-Private Partnerships in Health: World Bank Group Engagement in Health PPPs: an IEG Synthesis Report, Washington, DC, 2016;
- (m) The World Bank and Sustainable Development, <http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment>.

World Bank Inspection Panel,

- (a) Inspection Panel Annual Report: July 1, 2015 — June 30, 2016, Washington, DC, 2016;
- (b) Emerging Lessons Series No. 1: Involuntary Resettlement, Washington, DC, 2016;
- (c) Emerging Lessons Series No. 2: Indigenous Peoples, Washington, DC, 2016;
- (d) Emerging Lessons Series No.3, Environmental Assessment, Washington, DC, 2017.

World Bank Institute,

- (a) Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 3, Washington, 2017.